



observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos

ANALISIS DE POLITICAS Y LINEAS DE ACCION SUGERIDAS

Justicia más allá de las fronteras

Los crímenes transnacionales de Plan Cóndor

Francesca Lessa, Latin American Centre, Universidad de Oxford¹

Resumen

Cuarenta años después, lograr justicia por los delitos transnacionales cometidos en las décadas de 1970 y 1980 por la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor sigue siendo, en gran medida, una cuenta pendiente en América del Sur. Confrontar a los crímenes del pasado es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos en el futuro, y requiere esfuerzos concertados a nivel regional. Este informe está basado en un estudio sobre la investigación de los crímenes de Plan Cóndor llevado adelante entre el 2013 y el 2016 y, en particular, dos talleres de trabajo en los que participaron académicos/as, abogados/as, jueces, fiscales, expertos/as en políticas públicas y activistas de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El informe destaca los principales retos y obstáculos que hasta ahora han demorado la investigación de los delitos transnacionales en América del Sur. También se plantean tres propuestas de políticas públicas que se consideran necesarias para poder superar dichas dificultades en toda la región:

- *establecer equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las violaciones de derechos humanos;*
- *crear una base de datos o repositorio, a nivel regional, con información sobre los crímenes de Plan Cóndor;*
- *generar circuitos más ágiles de transmisión de la información, documentación y pruebas para los juicios penales.*

¹ Investigadora Marie Skłodowska-Curie, Latin American Centre, Universidad de Oxford, y consultora internacional del Observatorio Luz Ibarburu (Uruguay). La autora quisiera agradecer a Diego Sánchez Ancochea, Lorena Balardini, María Florencia González, Pablo Ouviaña, Jaime Nuguer, Marcos Kotlik, Pablo Chargoña, y Raúl Olivera Alfaro por su ayuda en la redacción de este documento.



The Leverhulme Trust



OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

Introducción

Al cumplirse, en noviembre de 2015, los 40 años de la fundación de Plan Cóndor, era necesario reflexionar sobre los pasos que se dieron en los países de Sur América para aclarar los crímenes cometidos en el marco de la coordinación represiva establecida entre las dictaduras latinoamericanas entre 1975 y 1981. En particular, debido al paso del tiempo, una de las prioridades claves en este ámbito era profundizar y concluir la investigación de esos delitos dentro de los próximos cinco-diez años. Actuar a tiempo será clave para lograr tal objetivo.

Desde mayo de 2015, gracias a una financiación por parte del programa ESRC Knowledge Exchange Funding del Reino Unido, del The Leverhulme Trust y la British Academy, con el apoyo también de Open Society Foundations (Iniciativa de Derechos Humanos), se desarrolló una colaboración entre el Latin American Centre de la Universidad de Oxford, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay. Posteriormente, se sumaron también el Centro de Extensión del Senado y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la central sindical uruguaya PIT-CNT y la Intendencia Municipal de Montevideo.

Los tres objetivos principales de esta colaboración eran: (a) intercambiar experiencias a nivel regional sobre las investigaciones de los crímenes del Plan Cóndor; (b) evaluar el juicio Plan Cóndor en Argentina y las implicaciones de su sentencia en la región; y (c) pensar estrategias y sugerir herramientas concretas a desarrollar que faciliten la investigación de los crímenes de Cóndor en cada país, como también a nivel regional.

Con tal fin, se organizaron dos encuentros, en [Chile](#) en diciembre de 2015 y en [Uruguay](#) en junio de 2016, con el siguiente formato: una conferencia abierta al público en el primer día y un taller por invitación en el segundo día. Las **conferencias**, en las que expusieron jueces, fiscales, abogados/as y activistas de derechos humanos involucrados directamente en la investigación de los crímenes, sirvieron para realizar un balance sobre la situación de las causas que investigan los crímenes de Plan Cóndor en Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Por otro lado, se realizaron también **talleres** con la participación de 60 personas específicamente invitadas, incluyendo a académicos/as, abogados/as, jueces, fiscales, expertos/as en políticas públicas e integrantes de la sociedad civil. Tomando como puntos de partida el juicio Plan Cóndor en Buenos Aires y causas vinculadas con Cóndor en Chile y Uruguay, el principal propósito de los talleres era abordar los obstáculos, legales o fácticos, que demoran o dificultan la investigación de los crímenes de Cóndor, así como pensar de forma conjunta estrategias y herramientas a implementarse a nivel regional para superarlos, agilizando de tal manera el esclarecimiento de estos delitos en el futuro cercano. Resúmenes de las discusiones de cada taller se encuentran disponibles en español, inglés y portugués en la web (taller en [Santiago](#) y taller en [Montevideo](#)). En los talleres se discutieron preguntas como:

- ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos hasta ahora que han demorado o impedido la investigación?
- ¿Qué implica investigar desde Chile un crimen que se cometió, por ejemplo, en Argentina? (y viceversa)
- ¿Qué herramientas necesitan los jueces, abogados, fiscales, para poder hacer de una forma efectiva y satisfactoria su trabajo de investigar crímenes que se cometieron fuera del país?

Se abordaron, además, específicamente estos tres ejes temáticos:

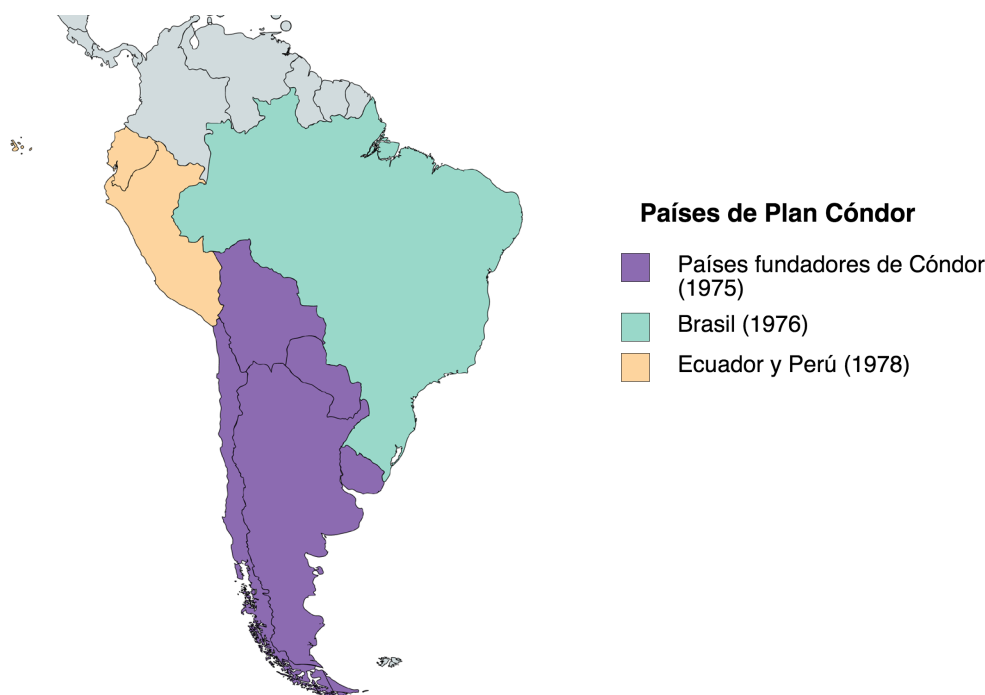
- 1 Construcción jurídica de los crímenes transnacionales de Cóndor;
- 2 Equipos y recursos necesarios para investigar los crímenes transnacionales de Cóndor;
- 3 Acceso a las pruebas (archivos, información, testigos) y comunicación entre los jueces, fiscales, abogados y organismos de derechos humanos.

Si en los años 1970 los países de la región se reunieron, a través del Plan Cóndor, para fomentar una política de coordinación represiva para cometer delitos, ahora, cuarenta años después, es necesario desarrollar políticas públicas a nivel regional con el objetivo de reparar e investigar esos mismos crímenes.

En este informe se recopilan las principales conclusiones y recomendaciones que surgieron de la colaboración llevada adelante a lo largo de estos meses. El informe tiene cuatro partes: primero, se brinda un *breve resumen de lo que fue el Plan Cóndor*; después, se ofrece un panorama sobre la *judicialización de los crímenes de Plan Cóndor* en la región; en la tercera parte, se destacan las *principales dificultades y desafíos en la investigación de los crímenes* del Cóndor y, por último, se describen las *tres recomendaciones principales* que surgieron de esta red multidisciplinaria de jueces, fiscales, abogados/as, activistas de derechos humanos, antropólogos/as y archivistas para profundizar y acelerar el esclarecimiento de los crímenes del Cóndor.

¿Qué fue el Plan Cóndor?

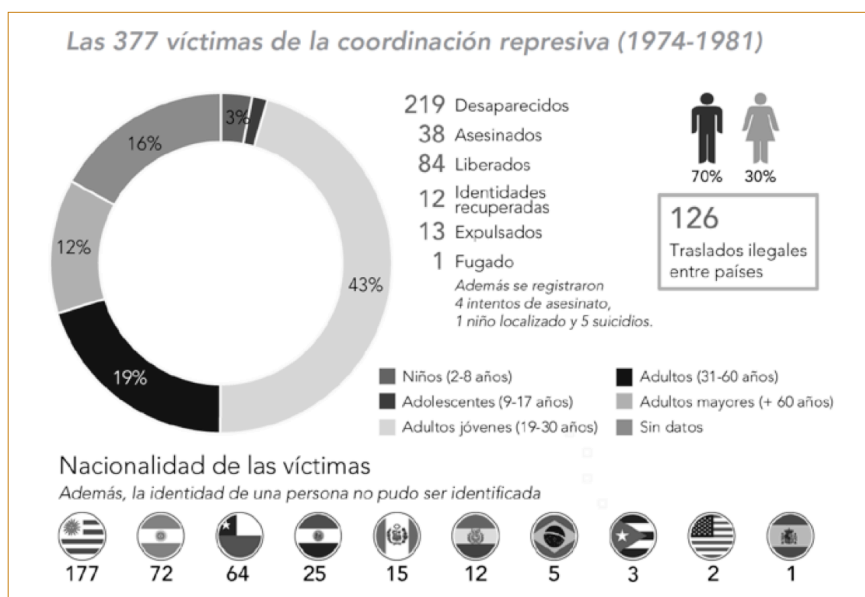
Desde mediados de la década de 1950, la violencia política inspirada por la guerra fría global sumergió a casi toda Sudamérica, con golpes de estado en Paraguay (1954), Brasil (1964), Argentina (1966, 1976), Uruguay y Chile (1973), y Bolivia (1971, 1980). Esos regímenes reprimieron sistemáticamente toda clase de oposición política y social, perpetrando crímenes como tortura, ejecuciones, violaciones, desapariciones y apropiación ilegal de niños. A mediados de los años 1970, la represión adquirió una dimensión adicional –y aún más siniestra– con la creación formal de una red transnacional de terror.



El Plan u Operación Cóndor fue una red secreta de inteligencia y coordinación represiva instituida por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a mediados de los años 1970 para secuestrar, torturar y asesinar a sus opositores políticos a lo largo y ancho de Sudamérica, convirtiendo dicha región en un área de terror e impunidad sin fronteras (ver mapa de los países de Cóndor, arriba). Cóndor tuvo su origen en cooperaciones informales y bilaterales entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y de seguridad de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay desde por lo menos 1972. Su creación se formalizó posteriormente en una reunión en Santiago de Chile, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 1975, organizada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), en la que participaron 50 oficiales de todos los países y presidida por el mismo General Pinochet. Posteriormente, en 1976, Brasil se sumó formalmente al Cóndor; en 1978, Perú y Ecuador se incorporaron también.

Documentos desclasificados de EEUU permitieron identificar **tres fases de Cóndor**: (1) estrecha **coordinación e intercambio** de inteligencia e información; (2) **operaciones conjuntas** en América del Sur; y (3) **asesinatos selectivos** afuera del subcontinente. La coordinación represiva desatendió completamente todos los principios del derecho internacional de los refugiados y la larga costumbre de proteger a los exiliados en la región. Los exiliados, pensando que habían encontrado refugio afuera de sus países de origen, fueron víctimas de “trampas mortales” en el extranjero.²

Entre 1975 y 1981, el Plan Cóndor fue responsable de la desaparición, tortura y asesinato de cientos de refugiados, militantes y líderes políticos. Según un informe sobre el tema, compilado por la UNESCO en 2016, se estima que hubo alrededor de **377 víctimas de la coordinación represiva entre 1974 y 1981**, entre ellos 177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos y 25 paraguayos.³ Es altamente probable que el total de las víctimas de Cóndor en realidad supere las 500.



Las víctimas de Plan Cóndor incluyeron desde renombrados hombres de la política hasta guerrilleros, activistas políticos y refugiados bajo el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las operaciones siempre involucraban, por lo menos, a agentes del país interesado (generalmente el país natal de la víctima) y del país en el que la persona se encontraba. Un importante

2 Lessa, Francesca. 2015. "Justice beyond Borders: The Operation Cóndor Trial and Accountability for Transnational Crimes in South America". *International Journal of Transitional Justice* 9(3): 494-506

3 *Operación Cóndor: 40 años después*. Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, página 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf

teatro de los crímenes fue la ciudad Buenos Aires, debido al gran número de exiliados políticos que se habían instalado allí desde la década de 1960. El centro clandestino de detención conocido como *Automotores Orletti* (fotos debajo de Francesca Lessa), ubicado en el barrio de Floresta de esa capital, fue uno de los lugares claves de donde operaron agentes argentinos, chilenos, y uruguayos que realizaban operativos en el marco de Plan Cóndor. Dicho centro funcionó entre el 11 mayo y el 3 noviembre de 1976. Se estima que alrededor de 300 personas fueron detenidas ilegalmente allí: la mayoría eran extranjeros (uruguayos, chilenos, y cubanos), muchos de los cuales fueron posteriormente trasladados a su país natal.



Otros sitios clandestinos de detención vinculados con operativos Cóndor, incluyen el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes en la Provincia de Buenos Aires en Argentina; Villa Grimaldi (foto: Francesca Lessa) y Cuatro Álamos, en Santiago de Chile; en Uruguay, la Casona de Punta Gorda, el 300 Carlos y el edificio en el que funcionaba el Servicio de Información y Defensa (SID) en Montevideo (fotos: Joel Richards y Mirtha Guianze); y el Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción en Paraguay.



Casona de Punta Gorda



Villa Grimaldi



SID



Departamento de Investigaciones de la Policía

La judicialización de los crímenes de Plan Cóndor

Del relevamiento efectuado sobre investigaciones judiciales que abordan al Plan Cóndor, hemos podido identificar un total de **23 causas** –en diferentes etapas del proceso penal– que abarcan crímenes cometidos por la coordinación represiva regional (ver Tabla 1 abajo para más detalles). De las 23 causas, 13 han tenido lugar en Uruguay, 4 en Chile y 6 en Argentina; 11 causas ya concluyeron (una de ellas fue archivada debido a la muerte del único imputado), tres se encuentran en etapa de juicio, y 9 en investigación. En estas causas se ha condenado, hasta la fecha, a **43 personas**, mientras que otras **77 están siendo juzgadas** en la actualidad. Por otro lado, considerando a las víctimas, los casos de **247** víctimas han sido judicializados por los tribunales de la región, mientras que la gran mayoría de ellas están aún bajo investigación judicial o en juicios en curso, que alcanzan a 440 víctimas.⁴

En una sentencia histórica, el 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal de Argentina dictó sentencia en la causa Plan Cóndor, condenado a 15 de los 17 imputados y reconociendo al Plan Cóndor como una asociación ilícita transnacional, delito por el cual también se impusieron penas. Un tramo de la causa Cóndor continúa en etapa de investigación en Argentina, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°7 y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 de la Capital Federal. Actualmente se está investigando a otros 193 imputados por su responsabilidad en los casos de 382 víctimas (348 investigadas por primera vez y 34 cuyo caso también formó parte del juicio recientemente finalizado). El total de víctimas de la Operación Cóndor cuyos casos han sido judicializados en Argentina asciende a 457 casos. El universo de casos incluye a víctimas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay e incorpora a ciudadanos/as de Brasil, Alemania y España.⁵ No hemos encontrado ninguna causa activa en Bolivia y Brasil, mientras que existe información confusa sobre la situación en Paraguay, datos que intentaremos aclarar.



Ex dictador Jorge R. Videla en el banquillo, juicio Cóndor, 5 de marzo de 2013, foto cortesía: H.I.J.O.S. Capital

4 Las cifras utilizadas en esta parte del informe fueron armadas recopilando información de las causas judiciales proporcionada por: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Argentina; el Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay; y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Por tal razón, difieren de las del informe UNESCO citado más arriba que fueron tomadas de los informes de: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Argentina), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile), la Comisión de Verdad y Justicia (Paraguay), la Comissão Nacional da Verdade (Brasil), la Comisión para la Paz; y datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Uruguay).

5 *La Judicialización de la Operación Cóndor*, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, noviembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ProcuLesas-Op-C3%B3ndor-Final.pdf>

Tabla 1. Judicialización del Cóndor en Latinoamérica

País causa	Causa	Crimen y número de víctimas	Imputado(s)	Estado	Países
ARG	Arancibia Clavel	Homicidio; Asociación Ilícita • 2	1	Sentencia (2004)	CHI; ARG
ARG	Automotores Orletti I	Homicidio; privación ilegítima libertad; tormentos • 65	4	Sentencia (2011)	ARG; URU
ARG	Automotores Orletti II	Privación ilegítima libertad; tormentos • 67	1	Sentencia (2016)	ARG; URU; CHI; CUB
ARG	Automotores Orletti III y IV	Homicidio; privación ilegítima libertad; tormentos • 9	4	Juicio	URU; ARG
ARG	Plan Cóndor I, II, y III	Privación ilegítima libertad; asociación ilícita • 107	17	Sentencia (2016)	ARG; URU; CHI; PAR; BOL
ARG	Plan Cóndor IV	348		Investigación en curso	ARG; URU; CHI; PAR; BOL; PER; BRA
CHI	Orlando Letelier	Homicidio • 1	2	Sentencia (1995)	CHI; EEUU
CHI	Carlos Prats	Homicidio; asociación ilícita • 2	9	Sentencia (2010)	CHI; ARG
CHI	Operación Cóndor	Secuestro; Homicidio • 12	68	Juicio	CHI; ARG
CHI	Operación Cóndor BIS	Secuestro • 11		Investigación en curso	CHI; ARG
URU	Anatole y Victoria Julién	Desaparición forzada, Sustracción de menores • 2		Investigación en curso	URU; ARG; CHI
URU	Antonio Viana	Tortura • 1		Investigación en curso	URU; ARG
URU	Edison Inzaurrealde y Nelson Santana	Desaparición forzada, Privación de libertad • 2		Archivada	URU; PAR; ARG
URU	Fusilados de Soca	Muerte, sustracción de menores y cambio de identidad • 5		Investigación en curso	URU; ARG
URU	Grupos de Acción Unificadora (GAU)	Muerte, Desaparición forzada, Traslado clandestino • 37	2	Sentencia (2009)	URU; ARG
URU	Héctor Giordano	Desaparición forzada • 1		Investigación en curso	URU; ARG
URU	María Claudia Gelman	Apropiación de menores, Desaparición forzada • 1	5	Juicio	ARG; URU
URU	Montoneros	Apropiación de menores, Tortura, Secuestro, Desaparición forzada, Privación de libertad, Asociación para Delinquir, Sustracción de menores • 22		Investigación en curso	ARG; URU
URU	Orletti (“primer vuelo”)	Tortura, Muerte, Secuestro, Desaparición forzada • 25		Investigación en curso	URU; ARG
URU	Orletti (Soba y otros)	Desaparición forzada, Privación de libertad • 28	8	Sentencia (2011)	URU; ARG
URU	Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti	Tortura, Secuestro, Privación de libertad • 4		Investigación en curso	URU; BRA
URU	Washington Barrios	Privación de libertad • 1		Acumulada a causa Orletti (Soba y otros)	URU; ARG
URU	Zelmar Michelini	Muerte • 4	2	Sentencia (2011)	URU; ARG

Obstáculos y desafíos en la investigación de los crímenes del Cóndor

La discusión en los talleres en Santiago y Montevideo permitió identificar 10 desafíos y obstáculos que dificultan la investigación de los crímenes transnacionales del Cóndor. Consideraremos cada uno de ellos en detalle.

En relación con la *construcción jurídica de los crímenes transnacionales de Cóndor*, se subrayaron cuatro dificultades principales:

1. Legislación procesal inadecuada y el papel de las víctimas

En Uruguay y Chile, los tipos penales que se utilizan en la investigación de las violaciones de derechos humanos (en el marco de Cóndor o no) se encuentran en **códigos penales destinados a sancionar delitos comunes, no delitos sistemáticos**. Por lo tanto, los tipos penales a disposición de los operadores judiciales son insuficientes para englobar acabadamente crímenes de una naturaleza tan compleja. Además, el hecho de tener que imputar al momento del juicio delitos comunes resulta en penas muy bajas en las sentencias, que no reflejan la gravedad de los crímenes cometidos. Se destacó, además, tanto en Uruguay como en Chile, la existencia de problemas vinculados a las herramientas procesales disponibles. La tarea de la **recolección y presentación de las pruebas en los juicios siempre ha estado a cargo de las víctimas**, quienes asumen una gran responsabilidad al respecto, sin que el Estado asuma su rol en ese sentido. Las víctimas tienen que brindar su testimonio muchas veces, lo cual provoca su revictimización y, también, genera problemas de recursos y de tiempo. Las víctimas tienen que aportar prueba, pero luego, no pueden tener un papel activo en las causas en Uruguay, donde no existe la figura de querellante como en Argentina. Por esa razón, se quiere impulsar un proyecto de ley para asegurar la participación de la víctima en las causas judiciales. Además de la invisibilización de las víctimas en el proceso penal en sí, existe también una **invisibilización de género en los tipos penales aplicados**. Por ejemplo, en la causa sobre violencia sexual denunciada por 28 mujeres en 2011 en Montevideo, la jueza solamente solicitó el procesamiento en 2016 por privación de libertad, sin incluir la tortura o la violación. La Fiscal apeló el procesamiento, considerando que el imputado tiene que ser juzgado también por tortura.



Movilización afuera de los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, por el juicio Atlético-Banco-Olimpo, diciembre de 2009, foto: Francesca Lessa

2. Tipificación de los crímenes y prescripción

En Uruguay, donde los delitos de desaparición forzada y de tortura existen en la legislación nacional desde 2006, algunos fiscales y jueces han sostenido que esas figuras legales se pueden aplicar para investigar los crímenes de la dictadura y de Cóndor. La Constitución de Uruguay, a pesar de su antigüedad, posee el artículo 72 que permite integrar los tratados internacionales al derecho nacional. Por lo tanto, en Uruguay, la base legal para aplicar el derecho internacional no resulta ser el problema principal; el principal obstáculo es, de hecho, la interpretación llevada adelante por los operadores judiciales cuando se enfrentan a este tipo de delitos e investigaciones. Algunos de ellos han luchado a lo largo de los años para sostener que los tratados internacionales de derechos humanos son aplicables en el país para poder aclarar los crímenes cometidos. A pesar de eso, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha desestimado en todos los casos el pedido de **tipificación del crimen** de desaparición forzada, utilizando las calificaciones de privación de libertad o de homicidio. Es una batalla jurídica que continúa. Además de la tipificación del delito, otro tema vinculado con el derecho internacional es la **calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad**. La prescripción como instrumento de extinción de la acción penal es un tema de debate en Uruguay aun en la actualidad: si la aplicación de la prescripción prevista para delitos comunes debería aplicarse en estos casos o si primaría la imprescriptibilidad dispuesta por el derecho internacional.



Ex coronel Manuel Cordero en el banquillo, juicio Cóndor, 5 de marzo de 2013, foto cortesía: H.I.J.O.S. Capital

3. Necesidad de establecer el contexto de Plan Cóndor

Varios de los participantes de los dos talleres subrayaron que sería importante contar con un proceso comprensivo para generar un marco común que permita entender el Plan Cóndor en toda su dimensión, siguiendo el modelo de la causa 13/84 en Argentina, el llamado Juicio a las Juntas Militares, en que se juzgaron a los integrantes de las Juntas Militares de los años de la dictadura. La causa 13/84 probó que entre 1976 a 1983 existió en la Argentina un plan sistemático de torturas y desaparición forzada de personas, constituyendo desde entonces un punto de partida para todos los juicios que siguieron, en los que no fue necesario volver a probar la existencia de ese plan. De este modo, sería útil tener un marco parecido sobre la existencia de Plan Cóndor como un plan sistemático, dentro del cual se puedan enmarcar y juzgar los delitos específicos y puntuales con relación a cada uno de los imputados.



Conmemoraciones en el aniversario de los 40 años del golpe militar de Pinochet, Santiago de Chile, septiembre de 2013: foto: Francesca Lessa

4. Dificultad de identificar los casos Cóndor

En Argentina, el país que más ha avanzado en la investigación de los crímenes de Cóndor, todos los casos de extranjeros secuestrados en el país se empezaron a investigar como posibles víctimas de Plan Cóndor. Con el paso del tiempo, este enfoque empezó a ser cuestionado, porque en realidad no todos los extranjeros fueron efectivamente víctimas de la coordinación represiva, sino que algunos de ellos se habían sumado a la militancia local y fueron perseguido a raíz de eso. En Chile, por otro lado, no se sistematizó la investigación y, por lo tanto, hay víctimas de Cóndor que se investigan en otras causas. Ejemplo de ello es la causa relacionada con el centro clandestino de Villa Grimaldi. Se discutió, por lo tanto, en los talleres la importancia de identificar criterios que sirvan para comprobar si los casos pueden enmarcarse en el marco de la coordinación represiva. *El elemento clave para identificar casos de Cóndor parece ser el cruce de fronteras.* Tal cruce puede tomar alguna de estas formas: (a) intercambio de información sobre una víctima entre por los menos dos países, normalmente el país de origen de la víctima y el país donde se encuentra; (b) la participación de agentes extranjeros en los delitos; y (c) el traslado de la(s) víctima(s) del país de detención a su país natal/de origen. *Cualquiera de estos tres criterios es indicativo de un caso Cóndor.*

En relación con los *equipos y recursos para investigar los crímenes transnacionales de Cóndor*, los participantes del taller destacaron los siguientes temas:

5. Falta de continuidad y comunicación

Esta situación genera problemas dado que es muy común que distintos jueces, así como otros actores y operadores judiciales, intervengan en diferentes etapas y momentos del proceso. Esta situación ha causado retrasos y demoras, pues con frecuencia, por ejemplo, en Chile y Uruguay, la intervención de un nuevo juez implica en la práctica un reinicio de la investigación.

6. Falta de equipos multidisciplinarios

Es necesario poder conformar equipos multidisciplinarios para apoyar las investigaciones de los crímenes de derechos humanos, con la participación de médicos forenses, antropólogos, historiadores, psicólogos, y traductores. Los equipos confirmados en la actualidad no cumplen con estas necesidades, en particular el Equipo del Ministerio del Interior en Uruguay. En Argentina, por ejemplo, fue

necesario crear equipos interdisciplinarios que permitieran examinar todos los elementos que son parte de estas complejas investigaciones. Si bien los testimonios siguen siendo el eje central del acervo de pruebas, al encontrarse nuevas pruebas documentales los actores del juicio Cóndor se vieron obligados a superar nuevos desafíos, que finalmente llevaron a la creación de equipos interdisciplinarios en colaboración con la Universidad de Buenos Aires. Otro tema, que también surgió en relación con Uruguay, es que no existe el acompañamiento a víctimas. Esto provoca su revictimización en múltiples oportunidades. Es necesario institucionalizar el acompañamiento, lo que podría lograrse, en parte, incorporando a estos equipos de trabajo a psicólogos y asistentes sociales.

Por último, sobre el *acceso a las pruebas y comunicación entre los jueces, fiscales, abogados y organismos de derechos humanos*, se resaltaron los siguiente cuatro temas:

7. Difícil acceso a los archivos

Se resaltó especialmente la imposibilidad de acceder a la totalidad del llamado Archivo del Terror en Paraguay, que contiene documentos claves sobre Plan Cóndor, pero también a otros archivos, militares y civiles, en toda la región. Se subrayó que algunos organismos pretenden mantener un control sobre la documentación, a la cual no pueden acceder otros operadores involucrados en la actividad investigativa, afectando negativamente el desarrollo de los procesos judiciales.

8. Dispersión, volumen y análisis de la prueba.

La existencia de varias causas judiciales en cada país y en la región ha provocado que la prueba esté dispersa. En otros casos, como remarcaron los participantes de Argentina en los talleres, la dificultad no es tanto la posibilidad encontrar la prueba, sino la dificultad para procesar grandes cantidades de información, identificar aquello que reviste mayor importancia para la causa y profundizar en otros elementos que puedan surgir de esa información. Con frecuencia, no hay una lógica o un criterio ordenador que ayude a analizar mejor la información que se obtuvo. El trabajo con la información requiere esfuerzos y los Estados no tienen una política muy clara acerca del modo en el que se debe trabajar y manejar esta información. Un avance sería implementar políticas de digitalización, para crear índices de análisis que permitan una examinación más simple y la incorporación de la prueba a los juicios.

9. Demoras prolongadas en la tramitación de exhortos internacionales

Estas demoras tienen un impacto a la hora de conseguir pruebas sobre los crímenes cometidos en parte o en su totalidad en el territorio de los países cercanos. Se subrayó la demora que generan los petitorios de exhortos internacionales, cuando hoy en día la tecnología existente debería favorecer una comunicación e intercambio más fluido de la prueba en las causas. Tales demoras se tornan injustificable frente al acceso a la tecnología con el que se cuenta en la actualidad.

10. Falta de especialización y capacitación

Bajo este rubro se resaltaron dos temas en particular. Por un lado, una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) de Uruguay, subrayó la necesidad de **capacitar a los funcionarios públicos que tengan que trabajar en este tema**, para sensibilizarlos. En el caso del MRREE de Uruguay, por ejemplo, la transnacionalización de la justicia requiere que los funcionarios diplomáticos estén a la altura de esa tarea. En particular, el MRREE ha tenido un rol en el juicio Cóndor que se desarrolla en Italia. Pero el funcionario que recibe al testigo tiene que tener sensibilidad y conocimiento, no sólo por voluntad propia, sino también por haber tenido capacitación en derechos humanos brindada por el estado. Por otro lado, varios participantes resaltaron que **la justicia en Uruguay no tiene investigadores, ni fiscalías especializadas**, sino que son los mismos funcionarios que atienden delitos comunes los que investigan casos de crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, en general existe una falta de especialización en estos temas y no hay instituciones equivalentes, por ejemplo, a la

Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina. En octubre de 2015, en Uruguay, se creó la Unidad Especializada en Derechos Humanos, para capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura. Aunque es un paso importante, no parece ser suficiente sino se establecen también capacitaciones históricas, así como políticas, estrategias y líneas institucionales de investigación y capacitación sobre los delitos para investigar. En septiembre de 2016, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento uruguayo un proyecto de ley para la creación de una fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.



Talleres en Montevideo en junio de 2016 y Santiago de Chile en diciembre de 2015

Conclusiones y recomendaciones

Recopilando las conclusiones de los talleres en Santiago y Montevideo, se llegó a las siguientes tres recomendaciones de políticas públicas para agilizar la investigación y el juzgamiento de los delitos de Plan Cóndor en el futuro cercano:

Crear equipos multidisciplinarios dedicados a investigar las causas de derechos humanos

Estos equipos se podrían crear al interior de los juzgados y/o en las oficinas de otros operadores judiciales que intervengan en los juicios, como las fiscalías. Dada la naturaleza compleja de los crímenes, estos equipos deberían ser multidisciplinarios, integrando no sólo a operadores judiciales (fiscales o abogados), sino particularmente a los siguientes expertos:

- **historiadores y analistas de archivos**, para apoyar la investigación documental y de archivos de los delitos;
- **psicólogos y asistentes sociales**, para la relación con los testigos y víctimas y para acompañarlos en las diferentes etapas del proceso penal;
- **antropólogos y médicos forenses**, en relación con las tareas de localización, búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada;
- **traductores**, para asistir con documentación enviada desde EEUU y/o en portugués.

Establecer una base de datos o repositorio, a nivel regional, con información sobre Plan Cóndor

La propuesta es establecer **una base de datos o repositorio** que contenga documentos e información probatoria, testimonios e información de los archivos producida en cada Estado que participe en Cóndor (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador) y que pueda ser utilizada en los procesos judiciales en curso, para evitar las demoras propias del trámite de los exhortos. Los principales tres acervos de los que se debería abastecer dicha base son:

1. Información oficial
 - 1.1. Poder Ejecutivo
 - 1.2. Poder Judicial
2. Información producida por organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales
3. Información desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos

Para más detalles sobre la construcción de la base de datos ver el **anexo I** (páginas 14 y siguientes).

Generar circuitos más ágiles de transmisión de la información, documentación y pruebas para los juicios

A la luz de la dificultad existente para conseguir pruebas de los crímenes transnacionales, así como las demoras que caracterizan a los exhortos internacionales que deberían facilitar el intercambio de información, se propusieron las siguientes **tres sugerencias** de políticas públicas para favorecer el avance de las investigaciones:

- **Reducir el tiempo** de tramitación de los pedidos de asistencia jurídica internacional vía exhortos;
- **Enmendar los Memoranda de Entendimiento entre los países de la región para el Intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos**, fijando un plazo de 60 días hábiles para realizar la entrega de la documentación en formato digital (por ejemplo el Memorandum de Entendimiento entre la República Argentina y la República de Chile para el Intercambio de Documentación para el Esclarecimiento de Graves Violaciones a los Derechos Humanos firmado el 12 de mayo de 2014). Se podrá pedir una extensión de 30 días hábiles más si existe un problema específico con la documentación;
- **Redactar nuevos convenios de cooperación judicial** que permitan a los jueces y fiscales intercambiar directamente -sin tener que recurrir a los exhortos- información, documentos y archivos para poder incorporarlos a la tramitación de las causas e investigaciones sobre Cóndor. Dichos convenios se podrían celebrar entre, por ejemplo, el Programa de Derechos Humanos de Chile y el Ministerio Público Fiscal de Argentina. El objetivo principal es garantizar una comunicación y cooperación más fluida y directa entre los actores que investigan activamente los crímenes. Esos convenios permitirán generar canales de comunicación directa entre los órganos involucrados en los procesos (tanto fiscales como jueces), que contemplen la transmisión de información descubierta durante las investigaciones y los elementos de prueba específicos, así como su utilización e incorporación directa formal en los procesos judiciales.

Es importante resaltar que las tres propuestas son independientes y diferentes: la primera tiene alcance general, mientras que las dos restantes tienen alcance específico. A pesar de que las tres propuestas tienen objetivos en común, son autónomas y ninguna puede subsumirse en la otra.

ANEXO 1

Base de datos o repositorio digital sobre la investigación de la Operación Cóndor.

Por Lorena Balardini, Universidad de Buenos Aires

La propuesta general es establecer **una base de datos o repositorio**, a nivel regional, que contenga documentos e información producida en cada Estado (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y que pueda ser utilizada en los procesos judiciales en curso, para evitar las demoras propias del trámite de los exhortos.

A partir de las discusiones en los talleres en Chile y Uruguay, gracias a la participación de los expertos, hemos visto que la información necesaria para el trámite de las causas Cóndor se divide básicamente en las siguientes:

1. Información oficial
 - 1.1. Poder Ejecutivo
 - 1.2. Poder Judicial
2. Información producida por organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales
3. Información desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos

Algunos ejemplos de cada tipo de información son:

1. Información oficial

1.1. Poder Ejecutivo

- 1.1.1 Comisiones de la Verdad (CONADEP, Rettig, Valech, CNV Brasil, etc.): informes, testimonios, legajos de víctimas, información sobre responsables, centros clandestinos, circuitos represivos, etc.
- 1.1.2 Ministerios (defensa, interior, entre otros): legajos de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, planes estratégicos de acción de las fuerzas, materiales de cursos y capacitaciones.
- 1.1.3 Archivos de la temática: Archivo Nacional de la Memoria (Argentina), Archivos del Terror (Paraguay).

1.2 Poder Judicial

- Expedientes judiciales relativos a causas Cóndor;
- Testimonios de víctimas/familiares y peritos (en video o escritos);
- Copia certificada de materiales de archivos o dependencias del poder ejecutivo nacional o de otros países en los casos Cóndor.

2. Información producida por organizaciones de la sociedad civil

- Testimonios de víctimas o familiares de víctimas.
- Listados de responsables.
- Información sobre centros clandestinos de detención, circuitos represivos.

Contenido de la base de datos

Con este vasto universo de información en mente, el armado de la base de datos puede pensarse en diferentes etapas.

Una *primera etapa* buscará recolectar los materiales que estén más accesibles para los actores de cada país: la información producida por las organizaciones de la sociedad civil, materiales públicos como biografías de víctimas Cóndor, bibliografía y publicaciones sobre Cóndor, y las sentencias en las causas Cóndor en la región y el extranjero, que son de acceso libre.

En una *segunda etapa*, los materiales Cóndor obrantes en los archivos e instituciones de Poder Ejecutivo de cada país.

Finalmente, en una *tercera etapa*, los materiales de las causas judiciales.

Diferentes niveles de acceso y seguridad

Cada una de las etapas de construcción de la base está relacionada con los niveles de accesibilidad que los tipos de información requieren. Es importante elaborar permisos y usuarios para garantizar el acceso sin comprometer información sensible, de acuerdo a su nivel de confidencialidad, para la protección y reserva de los datos personales de aquellos involucrados en el proceso. Los materiales de la etapa 1 y los del mismo estilo que puedan sumarse posteriormente serán de acceso público. Los materiales propios de la etapa 2 serán también accesibles a los abogados y víctimas que son parte en los procesos judiciales. Por último, los de la etapa 3 serán únicamente para operadores judiciales, para facilitar la tramitación de las causas.

Especificaciones técnicas

La herramienta se construiría en un soporte web de código libre que sea accesible desde cualquier terminal con acceso a internet. La intención no es que sea un mero repositorio sino la indexación de los documentos, su clasificación y la posibilidad de realizar búsquedas con un determinado criterio. En este sentido, un componente esencial de esta base de datos es un buscador inteligente, que pueda rastrear en forma rápida grandes volúmenes de información. Un requisito para ello es que la información volcada a la base web de Cóndor tenga un tratamiento previo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Costos y cuestiones administrativas (USD 38-40,000)

Los costos del armado de esta base de datos se concentran en las siguientes tareas:

1. *Diseño de la base, el buscador y los índices* que organizarán la información. Costo estimado: USD 30.000 (única vez)
2. *Tratamiento de la información* para garantizar la compatibilidad con el sistema (conversión de archivos de imagen a PDF, chequeo del estado de OCR de los documentos). Costo estimado: USD 15000 (única vez)
3. *Servicio de hosting* (servidor web). Costo estimado: USD 300 al año (x 5 años, costo total USD 1500)
4. *Mantenimiento de la base web*. Costo estimado: USD 1000 al año (x 5 años, costo total USD 5000)

Los costos de las actividades 1, 3 y 4 pueden disminuir si la web se instala en servidores del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR o en la Procuración General de la Nación en Argentina.

Los profesionales a contratar para el armado de la herramienta son:

- Un informático o diseñador web, para tareas 1, 3 y 4.
- Un especialista en bases de datos y producción e información en la temática de derechos humanos/dictaduras en Cono Sur, para las tareas 1 y 2.

Justicia más allá de las fronteras

Los crímenes transnacionales de Plan Cóndor



observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos



The Leverhulme Trust





observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos

POLICY BRIEF

Justice without Borders

Accountability for Plan Condor Crimes in South America

Francesca Lessa, Latin American Centre, University of Oxford¹

Executive Summary

Forty years on, accountability for the transnational crimes committed in the 1970s and 1980s by the coordinated repression known as Plan Condor remains a largely unresolved matter in South America. Dealing with the crimes of the past is essential to ensure human rights protection in the future and requires concerted efforts at the regional level. This policy brief is based on a multi-year study carried out between 2013 and 2016 on accountability for Plan Condor crimes and, in particular, two knowledge exchange workshops, in which academics, lawyers, judges, prosecutors, policy experts and members of civil society from Argentina, Brazil, Chile, and Uruguay participated. The brief highlights the main challenges and obstacles that have delayed and slowed down the elucidation of past transnational atrocities in South America. It also sets out three recommendations to overcome these hindrances across the region:

- *Setting up multidisciplinary teams dedicated to investigating human rights atrocities;*
- *Establishing a regional database or repository with information on Condor crimes;*
- *Strengthening regional channels ensuring a smooth flow of evidence for use in criminal trials.*

¹ Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, Latin American Centre, University of Oxford, and international consultant for the Observatorio Luz Ibarburu (Uruguay). The author would like to thank Diego Sánchez Ancochea, Lorena Balardini, María Florencia González, Pablo Ouviaña, Jaime Nuguer, Marcos Kotlik, Pablo Chargoña, and Raúl Olivera Alfaro for their assistance in preparing this brief.



The Leverhulme Trust



Introduction

The year 2015 marked the fortieth anniversary of the founding meeting of Plan Condor. On that occasion, it was important to reflect on the steps taken and the progress made in trying to shed light on the crimes perpetrated between 1975 and 1981 by the coordinated repression created by South America's military dictatorships. The next five to ten years, in particular, will be key in order to move forward with the criminal investigation of those very crimes. Time is of the essence.

Since May 2015, thanks to funding received from the ESRC's Impact Acceleration Account of the University of Oxford, the Leverhulme Trust, the British Academy, and the Open Society Foundations' Human Rights Initiative, a partnership was developed between the Latin American Centre of the University of Oxford, Chile's Ministry of Justice and Human Rights, and the NGO network Observatorio Luz Ibarburu of Uruguay. Subsequently, the Chilean Senate (Centro de Extension) and the Museum of Memory joined this collaboration in late 2015, while the Human Rights Secretariat of the Uruguayan central trade union, PIT-CNT, and the Montevideo Municipal Government also did so in 2016.

This partnership had three objectives:

- 1 To share and exchange experiences at the regional level on investigations into Plan Condor crimes;
- 2 To evaluate the Plan Condor Trial in Argentina and the implications of the final verdict within the region;
- 3 To develop strategies and suggest specific tools to facilitate and promote the investigation of Condor crimes in each country and at the regional level.

In order to archive those goals, two knowledge exchange events were organised, one in [Chile](#) in December 2015 and one in [Uruguay](#) in June 2016, with two sets of activities in each: a *conference* on the first day and a *closed-session workshop* on the second. The conferences, with presentations from local judges, prosecutors, lawyers and human rights activists directly involved in investigating crimes, assessed accountability efforts undertaken in Chile, Uruguay, Brazil, and Argentina in trying to clarify Condor atrocities. Moreover, two workshops also took place, involving a total of 60 participants specifically invited, encompassing academics, lawyers, judges, prosecutors, public policy experts and members of civil society. Taking as a starting point the Plan Condor trial in Buenos Aires, and similar lawsuits linked to Condor in Chile and Uruguay, the main purposes of the workshops were to (a) debate and tackle the obstacles, whether legal or factual, that delay or hinder the investigation of Condor crimes and (b) generate new strategies and tools that could be implemented at the regional level to overcome them, speeding up the elucidation of these atrocities in the near future. Summaries of the workshops' discussions are available in Spanish, English, and Portuguese on the web (workshop in [Santiago](#) and workshop in [Montevideo](#)). The following questions and topics were considered during the workshops:

- What are the major obstacles that have delayed or obstructed accountability?
- What are the challenges and difficulties for judicial operators in Chile who have to investigate a crime committed in Argentina? Or vice versa?
- What tools do judges, lawyers and prosecutors require to conduct effective and efficient investigations into wrongdoings committed outside their own country?

The workshops' discussions revolved around three key areas:

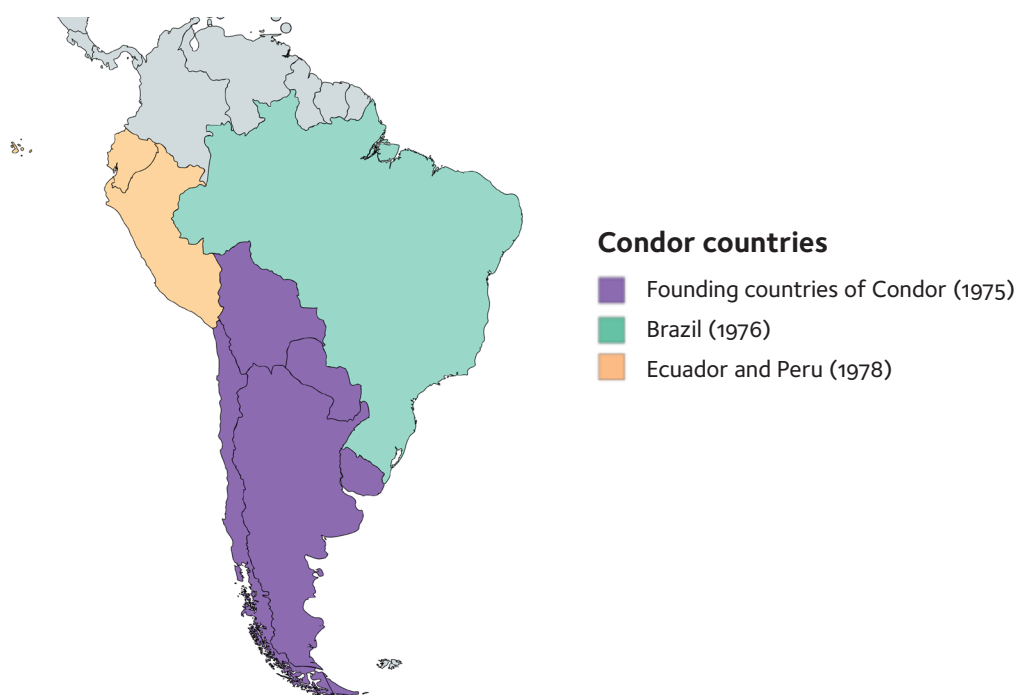
- 1 Juridical Construction of Plan Condor Transnational Crimes;
- 2 Necessary Resources to Investigate Plan Condor Transnational Crimes;
- 3 Access to Evidence and Communication among Judges, Prosecutors, Lawyers and Civil Society.

If in the 1970s the countries of the region were able to work together through Plan Condor in order to coordinate their repressive policies to jointly carry out atrocities, nowadays it is fundamental to develop public policies at a regional level in order to repair and redress those same crimes.

This report gathers the main conclusions and recommendations that emerged from this collaboration over the past few months. It has four parts. Firstly, it provides a *brief overview of Plan Condor*; secondly, it describes the progress *of criminal accountability for Condor crimes* across the region; thirdly, it sets out the *main difficulties and challenges* that have slowed down and hindered accountability for transnational crimes; and finally, it puts forward *three recommendations* that arose from this multidisciplinary network of judges, prosecutors, lawyers, activists of human rights, anthropologists and archivists, to promote and facilitate the investigation of Condor crimes.

What was Plan Condor?

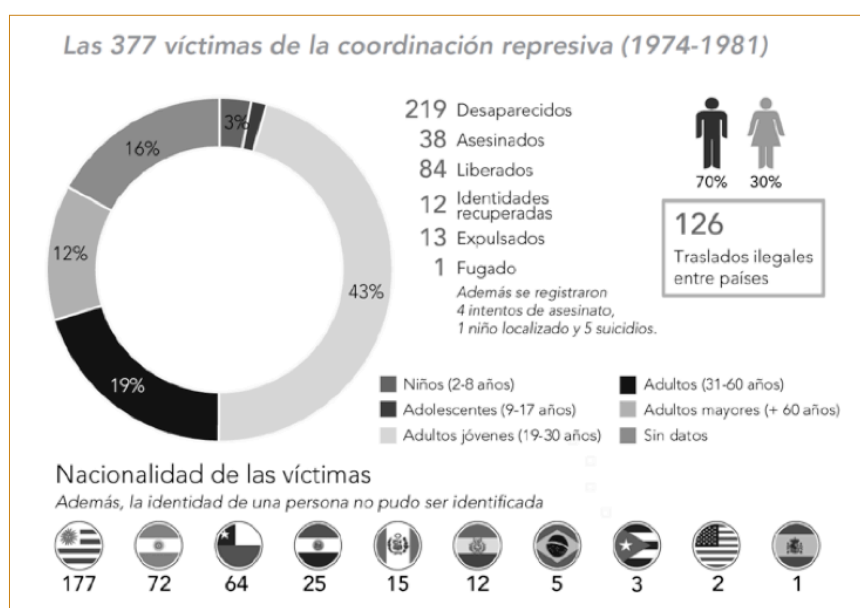
Since the mid-1950s, political violence inspired by the National Security Doctrine and the global backdrop of the Cold War, engulfed South America, with coups in Paraguay (1954), Brazil (1964), Argentina (1966, 1976), Uruguay and Chile (1973), and Bolivia (1971, 1980). These regimes systematically repressed all forms of political opposition, perpetrating countless human rights violations including torture, extrajudicial executions, enforced disappearances, illegal appropriation of children, and sexual violence. By the mid-1970s, human rights repression had also acquired an additional, and sinister, transnational dimension.



The so-called Plan or Operation Condor was a secret network of intelligence and coordinated repressive policies originally set up by the dictatorships of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay in the mid-1970s, to illegally detain, torture, and, most often, murder political opponents all across South America, turning that region into a borderless area of terror and impunity (see map). Condor initially emerged from informal and bilateral forms of cooperation between the armed and security forces of Argentina, Paraguay, Chile, and Uruguay from as early as 1972. Condor was later officially created at a meeting of intelligence and security forces organised by the Chilean National Intelligence Directorate (DINA) and held in Santiago, Chile, between November 25 and December 1, 1975; 50 officials from across the region participated at that gathering. Later on, in 1976, Brazil formally joined Condor and, in 1978, Peru and Ecuador also did so.

Declassified US documents have allowed scholars to identify *three Plan Condor phases*: (1) **close coordination and intelligence exchange**; (2) **joint operations in South America**; and (3) **targeted assassinations outside South America**. The transnational repressive coordination completely disregarded all principles of international law on refugees and the long custom of protecting exiles in South America. Exiles, thinking that they had found safe havens, became victims of “death traps” abroad.²

Between 1975 and 1981, Plan Condor facilitated the perpetration of disappearances, kidnappings and murder of hundreds of political leaders, activists and refugees. According to a UNESCO 2016 report on Condor, **the estimated number of victims between 1974 and 1981 is 377**, including 177 Uruguayans, 72 Argentines, 64 Chileans and 25 Paraguayans.³ Most likely, the total number of victims exceeds 500.



Victims ranged from renowned politicians, such as Uruguayans Zelmar Michelini and Héctor Gutiérrez Ruiz, to political activists, guerrillas, and refugees under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees. Plan Condor agents travelled beyond South America: Chilean politician Bernardo Leighton and his wife survived an assassination attempt in Rome in October 1975, while former Chilean diplomat Orlando Letelier was killed with his assistant in September 1976 in Washington DC. Operations always entailed at least agents from the interested country (usually

² Lessa, Francesca. 2015. “Justice beyond Borders: The Operation Condor Trial and Accountability for Transnational Crimes in South America”. *International Journal of Transitional Justice* 9(3): 494-506

³ *Operación Cóndor: 40 años después*. Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, page 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf

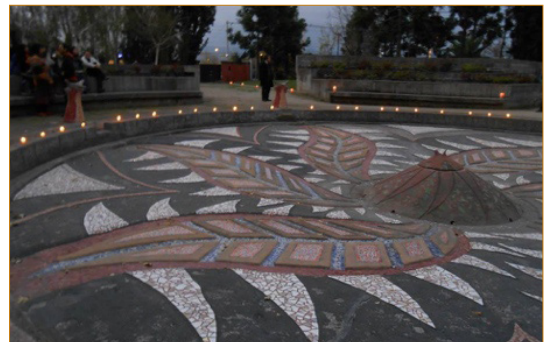
the victim's home country) and the country in which the person was located. A major location of crimes was Buenos Aires, due to the large number of political exiles living there since the 1960s. The clandestine detention centre known as *Automotores Orletti* (see photos below by Francesca Lessa), located in the capital's Floresta neighbourhood, was a key detention site from which Argentine, Chilean, and Uruguayan agents conducted Condor-related operations. *Orletti* functioned between May 11 and November 3, 1976. Around 300 people were illegally detained there: the majority were foreigners (Uruguayans, Chileans, and Cubans), many of whom were forcibly returned to their country.



Other well-known places of clandestine detention and torture associated with Plan Condor include, in Argentina, the Pozo de Banfield and Pozo de Quilmes; in Santiago de Chile, Villa Grimaldi (picture by Francesca Lessa) and Cuatro Alamos; in Uruguay, Punta Gorda House, "300 Carlos," and the building that housed the Defence Intelligence Service (SID) in Montevideo (see pictures kindly provided by Joel Richards and Mirtha Guianze); and in Paraguay, the Police Investigation Department in Asuncion.



Punta Gorda House



Villa Grimaldi



SID



Police Investigation Department

Accountability for Condor Crimes in South America

A survey of criminal investigations into Plan Condor crimes across the region conducted for this project identified a total of **23 proceedings** at different stages of the judicial process (see Table 1 for details). Of these 23 proceedings, 13 took place in Uruguay, 4 in Chile and 6 in Argentina; 11 have been finalised (one was shelved due to the death of the only defendant), 3 are at the trial stage, and 9 in the pre-trial phase. To date, **43 individuals have been sentenced, while another 77 are currently facing trial**. When looking at the victims, the cases of **247 victims have been investigated** by the region's tribunals, while the vast majority of them are still under investigation or at the trial stage (440 victims).⁴

In a historic verdict, delivered on May 27, 2016, Federal Tribunal 1 of Buenos Aires acknowledged that Plan Condor amounted to a joint criminal enterprise, condemning 15 of the 17 defendants in the case, with sentences ranging from 8 to 25 years. A section of the Condor lawsuit continues to be investigated in the pre-trial stage at Federal Criminal Tribunal 7 and Criminal Federal Prosecutor 10. This investigation encompasses approximately 193 defendants for their responsibility in the cases of 382 victims (348 being investigated for the first time and 34 already examined in previous trials). The total number of victims of Plan Condor under judicial investigation in Argentina has reached a total of 457 cases. The cases include victims from Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru and Uruguay, and also citizens from Brazil, Germany and Spain.⁵

We have been unable to find any active criminal proceedings in Bolivia and Brazil, and only confusing information in Paraguay; we are going to try to clarify this data.



Ex dictator Jorge R. Videla, Plan Condor trial, Buenos Aires, 5 March 2013, photo courtesy: H.I.J.O.S. Capital

4 Numbers about victims used in this section of the report differ from those cited in the previous section taken from the UNESCO report. The data here was compiled through information on criminal trials as provided by these institutions: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad of Argentina; the Observatorio Luz Ibarburu of Uruguay; and the Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública of Chile. On the other hand, the numbers used in the UNESCO report were constructed with data from the following institutions: la Comisión Nacional sobre la Desapariciones de Personas (Argentina), la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile), la Comisión de Verdad y Justicia (Paraguay), la Comissão Nacional da Verdade (Brasil), la Comisión para la Paz; y datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Uruguay).

5 Data taken from the report: La Judicialización de la Operación Cóndor, Informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Buenos Aires, noviembre de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ProcuLes-a-Op-C3%B3ndor-Final.pdf>

Table 1. Judicialization of Condor in South America

	Case file name	Crime(s) and number of victim(s)	Defendant(s)	Status	Countries involved
ARG	Arancibia Clavel	Murder; joint criminal enterprise • 2	1	Verdict (2004)	CHI; ARG
ARG	Automotores Orletti I	Murder; kidnapping; torture • 65	4	Verdict (2011)	ARG; URU
ARG	Automotores Orletti II	Kidnapping; torture • 67	1	Verdict (2016)	ARG; URU; CHI; CUB
ARG	Automotores Orletti III y IV	Murder; kidnapping; torture • 9	4	Trial	URU; ARG
ARG	Plan Cóndor I, II, y III	Kidnapping; joint criminal enterprise • 107	17	Verdict (2016)	ARG; URU; CHI; PAR; BOL
ARG	Plan Cóndor IV	348		Pre-trial	ARG; URU; CHI; PAR; BOL; PER; BRA
CHI	Orlando Letelier	Homicide • 1	2	Verdict (1995)	CHI; EEUU
CHI	Carlos Prats	Murder; joint criminal enterprise • 2	9	Verdict (2010)	CHI; ARG
CHI	Operación Cóndor	Kidnapping; murder • 12	68	Trial	CHI; ARG
CHI	Operación Cóndor BIS	Kidnapping • 11		Pre-trial	CHI; ARG
URU	Anatole y Victoria Julién	Enforced disappearance; appropriation of minors • 2		Pre-trial	URU; ARG; CHI
URU	Antonio Viana	Torture • 1		Pre-trial	URU; ARG
URU	Edison Inzaurrealde y Nelson Santana	Enforced disappearance; kidnapping • 2		Archived	URU; PAR; ARG
URU	Fusilados de Soca	Murder, appropriation of minors, identity theft • 5		Pre-trial	URU; ARG
URU	Grupos de Acción Unificadora (GAU)	Murder, enforced disappearance, refolement • 37	2	Verdict (2009)	URU; ARG
URU	Héctor Giordano	Enforced disappearance • 1		Pre-trial	URU; ARG
URU	María Claudia Gelman	Appropriation of minors, enforced disappearance • 1	5	Trial	ARG; URU
URU	Montoneros	Appropriation of minors, torture, kidnapping, enforced disappearance, kidnapping, joint criminal enterprise, appropriation of minors • 22		Pre-trial	ARG; URU
URU	Orletti (“primer vuelo”)	Torture, murder, kidnapping, enforced disappearance • 25		Pre-trial	URU; ARG
URU	Orletti (Soba y otros)	Enforced disappearance, kidnapping • 28	8	Verdict (2011)	URU; ARG
URU	Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti	Torture, kidnapping • 4		Pre-trial	URU; BRA
URU	Washington Barrios	Kidnapping • 1		Merged with Orletti (Soba and others)	URU; ARG
URU	Zelmar Michelini	Murder • 4	2	Verdict (2011)	URU; ARG

Obstacles and Challenges in Investigating Condor Crimes

The knowledge exchange workshops held in Santiago and Montevideo between 2015 and 2016 brought together a total of about 60 participants, who had been specifically invited owing to their direct and active role in the litigation and clarification of transnational crimes. They included judges, lawyers, prosecutors, human rights activists, and members of local ministries.

The debate was specifically framed around three themes: (1) *the Juridical Construction of Plan Condor Transnational Crimes*; (2) *the Necessary Resources to Investigate Plan Condor Transnational Crimes*; and (3) *Access to Evidence and Communication among Judges, Prosecutors, Lawyers and Civil Society*. The discussions during these workshops allowed us to identify **10 challenges and problems** that are currently being experienced by judicial operators and activists in the litigation and investigation of these crimes. Each is described in detail below.

Regarding the *Juridical Construction of Plan Condor Transnational Crimes*, four main difficulties were identified by the workshop participants:

1. Unsuitable procedural law and the role of victims

In Uruguay and Chile, **the criminal codes used to investigate human rights violations (whether committed within the framework of Plan Condor or not) are the same as the ones employed to probe common crimes, not systematic offences**. Therefore, the criminal codes and legal categories available to judicial operators are insufficient and inadequate to carry out comprehensive investigations of crimes that are of a complex nature. Difficulties, thus, emerge when approaching the investigation of international crimes, by applying domestic criminal categories; the latter fail to capture the magnitude of what happened and take into account all of its constitutive parts. For example, if enforced disappearances are investigated through the lens of the common crime of kidnapping and then, when the remains of the victim are identified, the investigation focuses only on murder, significant elements of the multifaceted crime of disappearance may be omitted by applying such a narrow focus. In addition, the fact of having to indict for common crimes often results in rather lenient sanctions at the sentencing stage, which do not match the gravity of the offences committed. It was also emphasised that, in Uruguay as well as in Chile, **the task of gathering and presenting proof and evidence during trials always falls upon the victims**, placing a huge burden on them, whereas the State has generally failed to assume its responsibility to actively prosecute and punish. The victims have to provide their testimony many times, which results in their revictimization and also causes problems in terms of resources and time. Victims have to play a central role in feeding evidence to criminal proceedings but, then, they cannot play an active part during the trial phase itself in Uruguay, for instance, where the figure of private prosecutor does not exist, as it does in Argentina. In addition to the invisibility of victims in the criminal process itself, **the issue of gender and gender specific violence remains invisible when looking at the crimes charged**. For example, in a case investigating the sexual violence suffered during the dictatorship by 28 women in Montevideo, the judge only charged the defendant for the crime of deprivation of liberty, failing to include torture or rape. The Prosecutor in the case has appealed against the indictment, considering that the accused also has to be prosecuted for torture.



Gathering outside the tribunals in Comodoro Py, Buenos Aires, for the Atlético-Banco-Olimpo trial, December 2009, photo: Francesca Lessa

2. The characterisation of the crimes and the issue of prescription

In Uruguay, the crimes of enforced disappearance and torture have existed within national legislation since 2006. Some prosecutors and judges have argued that these two legal categories should be used to investigate the crimes of the dictatorship and of Condor. Moreover, article 72 of the Constitution of Uruguay allows for international treaties to be applied, as if they were part of national law. Therefore, **the legal basis to apply international law in Uruguay is not the main problem, but rather, the bigger obstacle seems to be the interpretation of the law adopted by several judicial officials** when confronted with these types of crimes and investigations. Some of them have fought throughout the years to support the claim that international human rights law should be applied in the country to investigate the crimes. In spite of that, the Supreme Court of Justice (SCJ) has rejected in all instances the use of the category of forced disappearance, sentencing instead for deprivation of freedom or murder. It is a juridical battle that continues. In addition to the definition of the offence, another issue linked to international law is **the qualification of an act as a crime against humanity**. Statutes of limitations, as tools to extinguish criminal actions, are a subject of debate in Uruguay today: whether such statutes for common crimes should be applied in the case of crimes carried out during the dictatorship, or if the imprescriptibility of those crimes under international law should prevail.



Ex coronel Manuel Cordero, Plan Condor trial, Buenos Aires, 5 March 2013, photo courtesy: H.I.J.O.S. Capital

3. Need to Establish the Overall Context of Plan Condor

Several of the workshop participants stressed that it would be important to generate a common framework for understanding Plan Condor, following the model of Argentina's lawsuit 13/84, the Trial of the Military Commanders. The verdict in the Trial of the Military Commanders –handed down in December 1985– proved that, during the dictatorship from 1976 to 1983, there existed in Argentina a systematic plan of torture and enforced disappearance of persons. This legal finding in the 1985 verdict has been used ever since as a starting point for all the trials that have followed and have since tackled different aspects of human rights repression. Subsequent trials no longer had to prove the existence of such a systematic plan, but rather, they only had to deal with the atrocities committed in specific cases and the individuals directly responsible for them. **It would be useful to have a similar framework on the existence of Plan Condor, as a systematic plan within which specific crimes against victims and defendants can later be prosecuted, once the overall context of the Plan Condor's *modus operandi* has been firmly established.**



Commemorations on the 40th anniversary of the Pinochet's coup, Santiago de Chile, September 2013, foto: Francesca Lessa

4. Properly Identifying Condor Cases

In Argentina, the country that has progressed the furthest in investigating transnational crimes, all cases of foreign citizens illegally detained there were categorised and treated *prima facie* as potential victims of Plan Condor. With the passing of time, this approach has been questioned, as more evidence surfaced. Indeed, not all foreigners were victims of the repressive coordination since, in some instances, exiles and asylum seekers had joined local Argentine political groups and were eventually persecuted because of this local activism, rather than their political affiliation back in their country of origin. In Chile, on the other hand, the investigation has not been systematised and thus, there are victims of Condor being investigated in other trials, such as those relating to clandestine detention centres such as Villa Grimaldi. The participants in the knowledge exchange workshops discussed the necessity to identify clear criteria that would allow decisions to be made on whether a specific case can be categorised as Condor or not. *The key element in considering if it constitutes a Condor case seems to be that the crossing of a boundary must take place. This crossing of boundaries could take one or more of these forms:* (a) exchange of information about a victim between two countries (the victim's country of origin and the country where the victim is located); (b) the participation of foreign agents in the criminal act(s); and (c) the forceful return of the victim(s) from the country of detention to their country of origin. *When at least one of these three elements is met, it can be considered as a Condor case.*

Regarding the *Necessary Resources to Investigate Plan Condor Transnational Crimes*, the following two issues were highlighted by the participants:

5. Lack of Continuity and Communication in Investigations

This seemed to be particularly relevant and problematic, since it is often the case that different judges and judicial operators take part at different stages of the same trial process. This situation generates delays, since, for example, in many instances in both Chile and Uruguay, the arrival of a new judge means that the investigation has to start again from the beginning.

6. Establishing Multidisciplinary Teams to Investigate Atrocities

Multidisciplinary teams should be set up to support investigations into transnational crimes. These teams should encompass experts such as forensic doctors, anthropologists, lawyers, historians, psychologists, etc. Existing teams do not meet current needs, in particular the team in the Ministry

of the Interior in Uruguay. In Argentina, for example, it was necessary to establish interdisciplinary teams that were allowed to read and understand all the files and documentary evidence that composed the investigations into Plan Condor. Victims' testimony remained at the core of the evidence, yet for the prosecution, it was important to be able to incorporate the large amount of archival documents that existed about Condor in the trial. Dealing with this archival evidence was a new challenge for the public prosecution and it was successfully managed by the creation of a multidisciplinary team through a partnership with historians from the University of Buenos Aires. Another issue that emerged regarding Uruguay was the absence of a policy to accompany and psychologically support victims when they have to give testimony before the courts. This can result, on many occasions, in their revictimization. A policy of victim support should be institutionalised and this could also be partly achieved by incorporating psychologists and social workers into the proposed multidisciplinary teams.

Finally, on the question of *Access to Evidence and Communication among Judges, Prosecutors, Lawyers and Civil Society*, the participants drew attention to these four problems:

7. Problems with Accessing Archives

The inability to gain access to the entire collection of documents known as the Archives of Terror, in Paraguay, which contains key official papers about Plan Condor, was particularly emphasised, together with the difficulty of also gaining access to other archives, both military and otherwise, from across the region. Some participants remarked how some state institutions and bodies wish to retain control over the documentation that is requested and later submitted. This is something that has a clear and negative impact on the trials' progress.

8. Dispersal, Volume, and Analysis of Evidence

The existence of numerous judicial proceedings in each country and across the region means, in practice, that evidence is spread out, making access to it very difficult. In addition, as some of the Argentine participants highlighted, the challenge often lies not so much in finding evidence, but rather, in its sheer volume. This makes it hard to easily identify what could be used in a specific trial and detect new leads that may emerge from pre-existing evidence. Frequently, the evidence is not organised according to specific criteria that would make its analysis easier. The analysis of information requires States to provide resources and develop specific policies on how to work and manage existing sources of information and evidence. These could include policies on the digitalisation of documents, as well as the creation of indexes to organise and catalogue existing information, to permit a quick assessment and the incorporation of the evidence in criminal trials.

9. Delays in Official International Requests

Official international requests through Foreign Ministries are used to obtain evidence and proof of crimes committed wholly in or in part in the territory of nearby countries. These international requests, however, are extremely slow to be processed and it can take from several months to one year to receive a response. This seems to be out of sync with existing technologies, which should favour a free-flowing and smooth interchange of information among countries. These delays are unreasonable if we take into account the technology that is available today.

10. Lack of Specialisation and Training

Under this heading, two issues were highlighted, in particular regarding the case of Uruguay. On the one hand, an official of the Ministry of Foreign Affairs (MRREE) stressed **the need to train public officials who have to work on human rights issues, to sensitise them to this complex subject**. In the case of the MRREE, the transnationalisation of justice required that diplomats rise to the challenge of the task. For example, the MRREE had to play a role in the Condor trial in Italy. But the official who deals with a witness has to be sensitive and knowledgeable, not out of his/her own goodwill, but by

having been trained specifically in human rights. On the other hand, several participants highlighted how, **within the Uruguayan judiciary, there are no researchers, or special prosecutors**, but rather the same officials who deal with common crimes are the ones who have to investigate allegations of crimes against humanity. In general, **there is therefore a lack of expertise on these matter and there are no equivalent institutions**, for example, to the Office of the Attorney for Crimes against Humanity in the Public Prosecutor Office of Argentina. In October 2015, a Special Human Rights Unit was set up in Uruguay to train public prosecutors on the historical and political context of the dictatorship. Although this is an important step, it seems insufficient if it is not accompanied by the development of institutional strategies to investigate and provide further training on these crimes. In September 2016, a draft bill was put forward to Parliament to establish a Special Human Rights Prosecutor's Office to investigate the crimes of the dictatorship in Uruguay.



Workshops in Montevideo in June 2016 and Santiago de Chile in December 2015

Conclusions and Recommendations

The discussion during the two knowledge exchange workshops focused on suggesting practical tools and strategies that would facilitate and promote the investigation and prosecution of Plan Condor crimes in South America. The following three recommendations were agreed upon during those meetings:

Setting up multidisciplinary teams dedicated to investigating human rights crimes: these could be established within tribunals, public prosecutor's offices and/or other offices within the judiciary as appropriate in each country. In light of the complexities surrounding these human rights cases, these proposed teams would include, in addition to personnel from the office in which they are to be established, historians and document analysts to support the analysis of archival evidence and documents, anthropologists, forensic doctors, translators, and psychologists to accompany and provide support to victims and witnesses during the trial process as outlined below:

- **historians and document analysts**, to support the analysis of archival evidence and documents;
- **psychologists and social workers**, to manage the relationship with witnesses and victims and to accompany them through the different stages of the judicial process;
- **anthropologists and forensic doctors**, to assist with locating, searching and identifying the victims of enforced disappearance;
- **translators**, to help with documentation sent by the US and/or in Portuguese.

Establishing a database or repository at a regional level containing evidence, proof and information relating to Condor: such a database or repository would encompass information on existing trial proceedings across the region, as well as archival documents and other types of evidence that may be relevant to judicial investigations. The database would have different levels of access, with sections open to the public and others limited to judges, lawyers, and prosecutors, so that they could directly incorporate such information into trial processes and criminal investigations. In order to establish such a repository, it will be necessary to gather, compile and digitalize (where not already available) several documents and records, as well as develop and coordinate ways of accessing the information so that it can be included as part of legal proceedings, in all the countries that composed Condor (Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, and Peru). Please see Annex 1 below for more details on the database and its features.

Strengthening channels to ensure a smooth flow of information, documents and evidence to be used in the criminal process: In light of the difficulties discussed above in terms of gaining access to evidence of transnational crimes, and the delays that characterise international official requests through foreign ministries, these three interrelated policy suggestions are proposed to ensure faster and easier access to relevant information:

- **Reduce the timeframe** in which requests for international legal assistance are processed and dealt with;
- **Amend the Memoranda of Understanding between the countries of the region dealing with the exchange of documentation for the clarification of grave violations to human rights**, setting a deadline of 60 days for the delivery of the documentation in digital form (for example *the Memorandum of Understanding Between the Republic of Argentina and the Republic of Chile on the Exchange of Documentation to Clarify Serious Human Rights Violations* signed on 12 May 2014). An additional extension of 30 working days may be granted under exceptional circumstances;
- **Draft new conventions on judicial cooperation to enable judges and prosecutors to directly exchange (without having to resort to international official requests) information, documents, and files to be able to incorporate these into criminal investigations on Condor.** Such conventions could be established between, for example, the Human Rights Programme of Chile's Ministry of Interior and The Public Prosecutor's Office of Argentina. The goal here is to ensure smoother and faster ways of communication and cooperation between the actors that actively investigate the crimes. These conventions would allow channels of direct communication between the bodies involved in the trial process (both prosecutors and judges), which would include the transmission of information discovered during investigations and the specific evidence, as well as its use and formal incorporation in judicial proceedings.

ANNEX 1

Plan Condor database or digital repository

By Lorena Balardini, Universidad de Buenos Aires

The proposal is to create a regional **database or repository** that will contain documents and information produced in each of the States (Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador and Peru) and which can be used in existing trial proceedings to avoid delays in processing requests for information. Following discussions at the workshops in Chile and Uruguay, and the participation of experts, the information required to support Condor lawsuits can be divided up into the following three categories:

1. Official information
 - 1.1 The Executive
 - 1.2 The Judiciary
2. Information produced by local and international civil society organisations
3. Declassified information from the US State Department

A few examples of each type of information are:

1. Official information

1.1. The Executive

1.1.1 Truth Commissions (CONADEP, Rettig, Valech, CNV Brazil, etc.): reports, testimony, victims' files, information on perpetrators, clandestine centres, repressive network, etc.

1.1.2 Ministries (defence, interior, amongst others): files on members of the armed forces and security services, the forces' strategic action plans, course and training materials.

1.1.3 Archives on the subject: the National Archive of Memory in Argentina, the Archives of Terror in Paraguay.

1.2 The Judiciary

- Judicial documents relating to Condor lawsuits;
- Testimony from victims/relatives and experts (on video or written);
- Certified copies of archive material or departments within the national executive power or from other countries involved in Condor.

2. Information produced by civil society organisations

- Testimony from victims or relatives of victims.
- Lists of those responsible.
- Information on clandestine detention centres, repressive networks

Database content

Equipped with this vast amount of information, the construction of the database can be thought of as having distinct stages.

The *first stage* will be to gather the most accessible materials in each country: the information produced by civil society organisations, publically available materials such as Condor victims' biographies, bibliographies and publications about Condor, and the sentences handed out in Condor lawsuits in the region and abroad that are freely accessible.

The *second stage* will consist of Condor materials that have been filed in the archives and Executive Power institutions in each country.

Finally, the *third stage* will contain materials from relevant judicial lawsuits.

Different levels of access and security

Each of the stages of the database's construction relates to the level of access that the information requires. It is important to set up permissions and users, and guarantee access without compromising any sensitive information. This is to protect the personal details of those involved in the process. The materials in stage 1, and those of the same format that can be added later, will be publically accessible. The materials in stage 2 will also be accessible to lawyers and victims who are part of the judicial proceedings. Finally, the materials in stage 3 will only be accessible by judicial operators to facilitate the processing of the lawsuits.

Technical specifications

The tool would be built using open-source software and would be accessible from anywhere with an internet connection. The idea is that it would not simply be a repository, but that documents would be indexed and classified, and it would be possible to conduct searches according to certain criteria. An essential feature of this database is a search engine that can quickly sift through large volumes of information. It is vital that the information used to populate the database has first been converted using optical character recognition (OCR) software.

Costs and administrative considerations (USD 38-40,000)

The costs of the database are focused on the following tasks:

1. *Design of the database, search engine and indexing* to organise the information. Estimated cost: USD 30,000 (one-off).
2. *Information processing* to ensure compatibility with the system (converting archived images to pdf format, checking OCR of documents). Estimated cost: USD 15,000 (one-off).
3. *Hosting service* (web server). Estimated cost: USD 300 per year (x 5 years, total cost USD 1,500).
4. *Database maintenance*. Estimated cost: USD 1,000 per year (x 5 years, total cost USD 5,000).

The costs of activities 1, 3 and 4 might be lower if the database uses the servers at the Institute of Public Policy of Human Rights (MERCOSUR) or those at the Public Prosecutor's Office in Argentina.

The following professionals will need to be involved:

- A computer expert or web designer for tasks 1, 3 and 4.
- A specialist in databases, and production and information on the topic of human rights/dictatorships in the Southern Cone for tasks 1 and 2.

Justice without Borders

Accountability for Plan Condor Crimes in South America



observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos





observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos

ANÁLISE POLÍTICA E SUGESTÕES DE LINHAS DE AÇÃO

Justiça mais além dos limites das fronteiras

Os crimes transnacionais da Operação Condor

Francesca Lessa, Latin American Centre, Universidade de Oxford¹

Tradução por Fernanda Teixeira

Resumo

Depois de quarenta anos, conseguir justiça para os crimes transnacionais cometidos nas décadas de 1970 e 1980 pela coordenação repressiva conhecida como Operação Condor continua sendo, ainda e em grande medida, uma conta pendente na América do Sul. É fundamental enfrentar os crimes do passado para garantir a proteção dos direitos humanos no futuro, e isso requer esforços concertados a nível regional.

Este relatório está baseado em um estudo sobre a investigação dos crimes da Operação Condor que foi realizado entre 2013 e 2016. Nesse período, também foram feitos dois workshops de trabalho nos quais participaram acadêmicos/as, advogados/as, juízes, promotores, especialistas/as em políticas públicas e ativistas da sociedade civil da Argentina, do Brasil, do Chile e do Uruguai. O relatório destaca os principais desafios e obstáculos que tem atrasado até o momento a investigação dos crimes transnacionais na América do Sul. Também se apresentam três propostas de políticas públicas que se consideram necessárias para poder superar essas dificuldades em toda a região:

- *estabelecer equipes multidisciplinares dedicados a investigar as violações dos direitos humanos;*
- *criar uma base de dados ou reposição, a nível regional, que contenha informação sobre os crimes da Operação Condor;*
- *gerar circuitos mais ágeis de transmissão da informação, documentação e provas para os processos penais.*

¹ Pesquisadora Marie Skłodowska-Curie, Latin American Centre, Universidade de Oxford, e consultora internacional para o Observatório Luz Ibarburu (Uruguai). A autora gostaria de agradecer a Diego Sánchez Ancochea, Lorena Balardini, María Florencia González, Pablo Ouviaña, Jaime Nuguer, Marcos Kotlik, Pablo Chargoña e Raúl Olivera Alfaro por sua assistência na preparação deste relatório.



The Leverhulme Trust



OPEN SOCIETY
FOUNDATIONS

Introdução

Em novembro de 2015, completou-se 40 anos da fundação da Operação Condor, também conhecido como Plano Condor, assim fez-se necessário refletir sobre os passos que foram dados nos países da América do Sul para esclarecer os crimes cometidos no âmbito da coordenação repressiva que ocorreram nas ditaduras latino-americanas entre 1975 e 1981. Particularmente, por causa da passagem do tempo, uma das prioridades chaves neste âmbito era investigar a fundo e concluir a investigação desses crimes em um período compreendido os próximos cinco aos dez anos. Agir a tempo é chave para conquistar este objetivo.

Desde maio de 2015, graças ao financiamento do programa ESRC Knowledge Exchange Funding do Reino Unido, do The Leverhulme Trust e a British Academy, e também do Open Society Foundations (Iniciativa Direitos Humanos), foi desenvolvida uma colaboração entre o Latin American Centre de la Universidad de Oxford, o Ministério de Justiça e Direitos Humanos do Chile e o Observatório Luz Ibarburu de Uruguay. Posteriormente, também se somaram a esta iniciativa o Centro de Extensão do Senado e do Museu da Memória e os Direitos Humanos do Chile, a Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Sociais da central sindical uruguaia PIT-CNT e a Intendência Municipal de Montevideo.

Foram três os principais objetivos desta colaboração: (a) intercambiar experiências a nível regional sobre as investigações dos crimes da Operação Condor; (b) avaliar o julgamento da Operação Condor na Argentina e as consequências das sentenças na região; e (c) pensar estratégias e sugerir ferramentas concretas para desenvolver que facilitem a investigação dos crimes do Condor em cada país e a nível regional.

Com esse objetivo, foram organizados dois encontros, um no [Chile](#) em dezembro de 2015 e um no [Uruguay](#) em junho de 2016, com o seguinte formato: uma conferência aberta ao público no primeiro dia e um workshop para convidados no segundo dia. As **conferências**, nas quais fizeram exposições juízes, promotores, advogados/as e ativistas de direitos humanos envolvidos de maneira direta na investigação dos crimes, foram úteis para realizar um balanço da real situação sobre os processos em que são investigados os crimes da Operação Condor no Chile, no Uruguai, no Brasil e na Argentina. Por outro lado, também foram realizados **workshops** nos quais participaram um total de 60 pessoas convidadas especificamente, incluindo acadêmicos/as, advogados/as, juízes, promotores, especialistas/as em políticas públicas e integrantes da sociedade civil. Tomando como pontos de partida o julgamento do Plano Condor em Buenos Aires e a causas vinculadas com Condor no Chile e no Uruguai, o principal objetivo dos workshops era abordar os obstáculos, legais ou fáticos, que atrasam ou dificultam a investigação dos crimes de Condor, além de pensar juntos estratégias e ferramentas que possam ser implementadas a nível regional para vencer essas dificuldades, agilizando de tal maneira o esclarecimento destes crimes em um futuro próximo. Resumos das discussões de cada workshop estão disponíveis em espanhol, inglês e português na web (workshop e [Santiago](#) e workshop em [Montevideo](#)). Nos workshops se discutiram perguntas como:

- Quais têm sido os maiores obstáculos, até agora, que atrasam ou impedem a investigação?
- Quais são as implicações de se investigar, no Chile, um crime que foi cometido, por exemplo, na Argentina? (ou o inverso)?
- Que ferramentas juízes, advogados e promotores necessitam para poderem fazer, de forma efetiva e satisfatória, o trabalho de investigar crimes que foram cometidos fora do país?

Além disso, foram abordadas especificamente estes tres eixos temáticos:

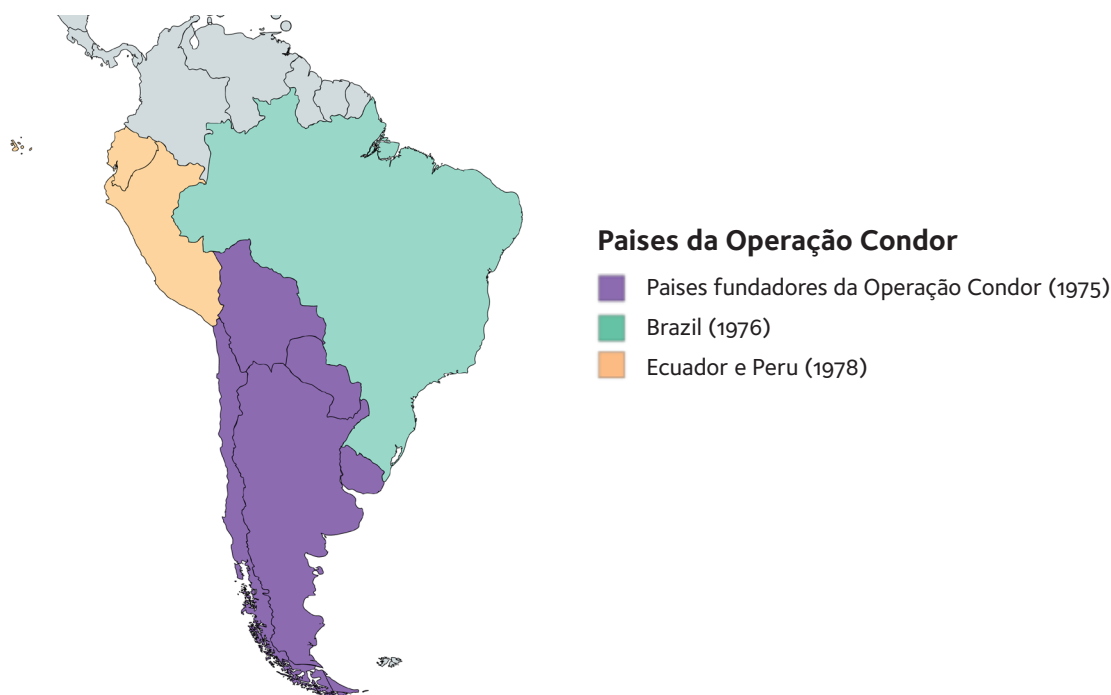
- 1 Construção jurídica dos crimes transnacionais da Operação Condor;
- 2 Equipes e recursos necessários para investigar os crimes transnacionais da Operação Condor;
- 3 Acesso às provas (arquivos, informação, testemunhas) e comunicação entre os juízes, membros do Ministério Público, advogados e organismos de Direitos Humanos.

Se em 1970 os países da região se reuniram, através da Operação Condor, para promover uma política de coordenação repressiva para cometer crimes, agora depois de quarenta anos, é necessário desenvolver políticas públicas a nível regional com o objetivo de reparar e investigar esses mesmos crimes.

Neste relatório, estão recopiladas as principais conclusões e recomendações decorrentes da colaboração realizadas ao longo de todos estes meses. O relatório possui quatro partes abordadas da seguinte maneira: primeiro um *breve resumo do que foi a Operação Condor*; depois, um panorama sobre a *judicialização dos crimes da Operação Condor* na região; na terceira parte, destacam-se as *principais dificuldades e desafios na investigação dos crimes* do Condor e, por último, são descritas as *três principais recomendações* que surgiram desta rede multidisciplinar de juízes, promotores, advogados/as, ativistas de direitos humanos, antropólogos/as e arquivistas para aprofundar e acelerar o esclarecimento dos crimes do Condor.

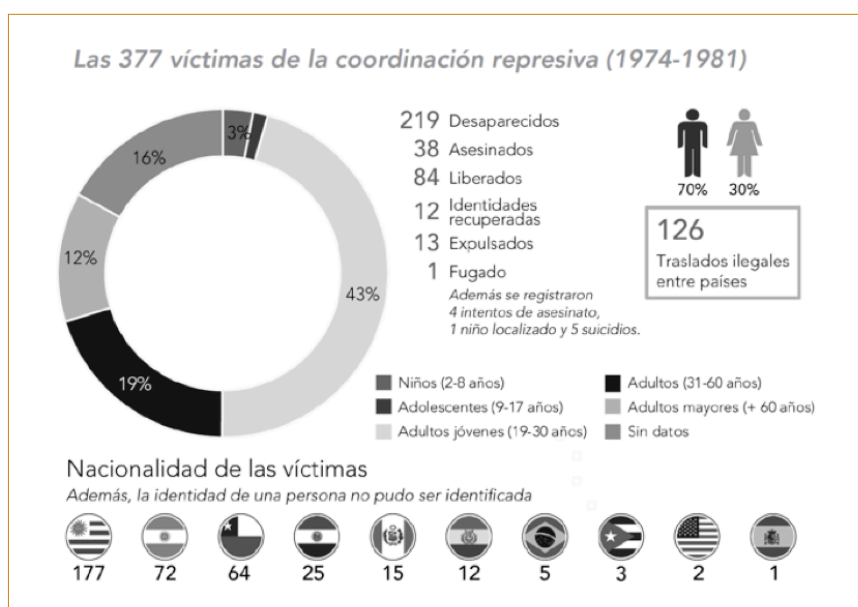
O que foi a Operação Condor?

Desde meados da década de 1950, a violência política inspirada pela guerra fria global submergiu em quase toda a América do Sul, nos golpes de estado do Paraguai (1954), do Brasil (1964), da Argentina (1966, 1976), do Uruguai, do Chile (1973), e da Bolívia (1971, 1980). Esses regimes reprimiram sistematicamente qualquer tipo de oposição política e social, perpetuando crimes como tortura, execuções, estupros, desaparecimento e apropriação ilegal de crianças. A meados de 1970, a repressão adquiriu uma dimensão extra –e ainda mais sinistra– com a criação formal de uma rede transnacional de terror.



O Plano ou Operação Condor foi uma rede secreta de inteligência e coordenação repressiva instituída pelas ditaduras da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai nos anos 70 para sequestrar, torturar e assassinar os opositores políticos a largo e direita na América Latina, transformando esta região em uma área de terror e de impunidade sem fronteiras (ver mapa dos países que compuseram o Condor). Desde 1972, o Condor teve sua origem em cooperações informais e bilaterais entre as Forças Armadas (FFAA) e de segurança da Argentina, do Paraguai, do Chile e do Uruguai. A criação do Condor foi formalizada posteriormente em reuniões que aconteceram em Santiago de Chile, entre o dia 25 de novembro e o dia 1 de dezembro de 1975, organizada pela Direção Nacional de Inteligência (DINA), na qual participaram 50 oficiais de todos os países. O general Pinochet em pessoa era o que presidia essas reuniões. Posteriormente, em 1976, Brasil aderiu formalmente ao Condor e, em 1978, Peru e Equador se juntaram também.

Entre 1975 e 1981, a Operação Condor foi responsável pelo desaparecimento, tortura e assassinato de centenas de refugiados, militantes e líderes políticos. Segundo um relatório sobre o tema, compilado pela UNESCO em 2016, estima-se que houve aproximadamente **377 vítimas da coordenação repressiva entre 1974 e 1981**. Entre essas vítimas 177 eram uruguaios, 72 argentinos, 64 chilenos e 25 paraguaios.² É muito provável que o total das vítimas do Condor, na verdade, passe de 500.



Documentos desclassificados dos EUA permitiram identificar **três fases do Condor**: (1) **coordenação estreita e intercâmbio** de inteligência e informação; (2) **operações conjuntas** na América do Sul; e (3) **assassinatos seletivos** fora do subcontinente. A coordenação repressiva ignorou completamente todos os princípios do direito internacional dos refugiados e o tradicional costume de proteger os exiliados na região. Os exiliados, pensando que tinham encontrado refúgio fora de seus países de origem, foram vítimas de "armadilhas mortais" no exterior.

As vítimas incluem de homens renomados da política até guerrilheiros, ativistas políticos e refugiados sob o mandato da Alta Comissão das Nações Unidas para os Refugiados. As operações sempre envolviam, pelo menos, a agentes do país interessado (geralmente o país natal da vítima) e do país no

² *Operacion Condor: 40 anos despues*. Centro Internacional para la Promocion de los Derechos Humanos. UNESCO: marzo de 2016, pagina 260, http://www.cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf

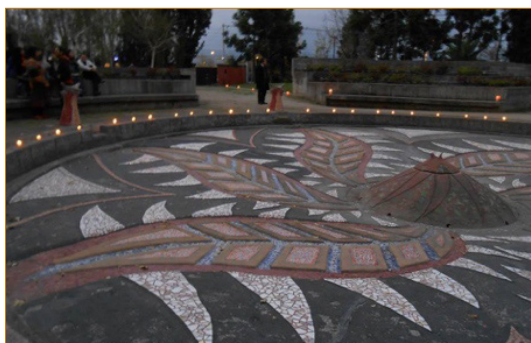
qual a pessoa se encontrava. Um importante palco desse teatro dos crimes foi a cidade de Buenos Aires, devido ao grande número de exiliados políticos que tinham se instalado lá a partir década de 1960. O centro clandestino de detenção conhecido como Automotores Orletti (fotos abaixo por Francesca Lessa), localizado no bairro Floresta dessa capital, foi um dos lugares emblemáticos de onde tomavam decisões agentes argentinos, chilenos, e uruguaios que realizavam operações no âmbito da Operação Condor. Dito centro funcionou do dia 11 maio até o dia 3 novembro de 1976. Aproximadamente 300 personas foram presas ilegalmente lá: a maioria estrangeiros (uruguaios, chilenos e cubanos), muitos dos quais foram posteriormente trasladados a seu país natal.



Outros locais clandestinos de detenção onde foram vistas vítimas do Condor que podemos incluir os seguintes lugares na: Argentina, o Pozo de Banfield e o Pozo de Quilmes; Villa Grimaldi (foto: Francesca Lessa) e Cuatro Álamos, em Santiago do Chile; no Uruguai, a Casona de Punta Gorda, o 300 Carlos e o edifício no qual funcionava o Servicio de Información e Defensa (SID) em Montevideo (fotos por: Joel Richards e Mirtha Guianze); e o Departamento de Investigaciones da Policía de Assunção no Paraguai.



Casona de Punta Gorda



Villa Grimaldi



SID



Departamento de Investigaciones da Policía

A judicialização dos crimes da Operação Condor

Do relevamento efetuado sobre investigações judiciais em toda a região, podemos identificar um total de **23** processos penais –em diferentes etapas do processo penal– que englobam alguns dos crimes cometidos pela Operação Condor (ver Tabela 1 para mais detalhes).³ Dos *23 processos penais*, *13 ocorreram no Uruguai, 4 no Chile e 6 na Argentina*; 11 foram concluídos (um dos processos foi arquivado devido a morte do único processado), três se encontram em etapa de julgamento, e 9 em investigação. Nestes processos, foram condenados até a presente data, **43 pessoas**, enquanto atualmente outras **77 estão sendo julgadas**. Por outro lado, considerando as vítimas, os processos de **247 vítimas estão sendo judicializados** pelos tribunais da região, enquanto a grande maioria deles ainda estão sob investigação judicial ou em julgamentos em curso (440 vítimas).⁴

Em uma sentença histórica, no dia 27 de maio de 2016, o Tribunal Oral do Criminal Federal Nº1 da Capital Federal da Argentina promulgou a sentença na enorme causa da Operação Condor. Condenado 15 dos 17 processados e reconhecendo a Operação Condor como uma associação ilícita, crime pelo qual outras penas também foram impostas. Um trecho do processo do Condor continua e, a etapa de investigação na Argentina, sob a responsabilidade do *Juzgado en lo Criminal e Correccional Federal Nº7* e da *Promotoria Nacional en lo Criminal e Correccional Federal Nº10* da Capital Federal. Atualmente, está se investigando outros 193 acusados por sua responsabilidade nos casos das 382 vítimas (348 investigadas por primeira vez e 34 cujo caso também faz parte do julgamento finalizado recentemente). O total de vítimas da Operação Condor cujos processos tem sido judicializados na Argentina chega aos 457 casos. O universo de casos inclui vítimas da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Paraguai, e do Peru e do Uruguai e incorporam cidadãos e cidadãs do Brasil, da Alemanha e da Espanha.

Não encontramos nenhum processo ativo na Bolívia nem no Brasil, e além disso existe informação confusa sobre a situação no Paraguai (dados que tentaremos esclarecer).



Ex ditador Jorge R. Videla, julgamento Operação Condor, 5 de março de 2013, Buenos Aires, foto cortesia: H.I.J.O.S. Capital

³ Ver também *A Judicialização da Operação Condor*, Relatório da Procuradoria de Crimes contra a Humanidade, Buenos Aires, novembro de 2015, <http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/Informe-ProcuLes-a-Op-C%C3%B3ndor-Final.pdf>

⁴ As cifras utilizadas nesta parte do relatório foram feitas recopilando informação dos processos judiciais proporcionada pela: Procuradoria de Crimes contra a Humanidad da Argentina; o Observatório Luz Ibarburu do Uruguai; e o Programa de Direitos Humanos do Ministério del Interior e Seguridad Pública do Chile. Por essa razão, diferem-se das do relatório da UNESCO citado mais acima que foram obtidos dos relatórios da: Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (Argentina), a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação (Chile), a Comissão da Verdade e Justiça (Paraguai), a Comissão Nacional da Verdade (Brasil), a Comissão para a Paz; e dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (Uruguai).

Tabela 1. Judicialização do Candor na América Latina

País causa	Causa	Crime e número de vítimas	Imputado(s)	Estado	Países
ARG	Arancibia Clavel	Homicídio; Asociación Ilícita • 2	1	Sentença (2004)	CHI; ARG
ARG	Automotores Orletti I	Homicídio; privação ilegítima de liberdade; tormentos • 65	4	Sentença (2011)	ARG; URU
ARG	Automotores Orletti II	Privação ilegítima de liberdade; tormentos • 67	1	Sentença (2016)	ARG; URU; CHI; CUB
ARG	Automotores Orletti III e IV	Homicídio; privação ilegítima de liberdade; tormentos • 9	4	Juízo	URU; ARG
ARG	Plano Condor I, II, e III	Privação ilegítima de liberdade; associação ilícita • 107	17	Sentença (2016)	ARG; URU; CHI; PAR; BOL
ARG	Plano Condor IV	348		Investigação em curso	ARG; URU; CHI; PAR; BOL; PER; BRA
CHI	Orlando Letelier	Homicídio • 1	2	Sentença (1995)	CHI; EEUU
CHI	Carlos Prats	Homicídio; associação ilícita • 2	9	Sentença (2010)	CHI; ARG
CHI	Operação Condor	Sequestro; Homicídio • 12	68	Juízo	CHI; ARG
CHI	Operação Condor BIS	Sequestro • 11		Investigação em curso	CHI; ARG
URU	Anatole e Victoria Julién	Desaparecimento forçado, Subtração de menores • 2		Investigação em curso	URU; ARG; CHI
URU	Antonio Viana	Tortura • 1		Investigação em curso	URU; ARG
URU	Edison Inzaurrealde y Nelson Santana	Desaparecimento forçado, Privação de liberdade • 2		Arquivada	URU; PAR; ARG
URU	Fusilados do Soca	Morte, subtração de menores e câmbio de identidade • 5		Investigação em curso	URU; ARG
URU	Grupos de Ação Unificadora (GAU)	Morte, Desaparecimento forçado, Traslado clandestino • 37	2	Sentença (2009)	URU; ARG
URU	Hector Giordano	Desaparecimento forçado • 1		Investigação em curso	URU; ARG
URU	Maria Claudia Gelman	Apropriação de menores, Desaparecimento forçado • 1	5	Juízo	ARG; URU
URU	Montoneros	Apropriação de menores, Tortura, Sequestro, Desaparecimento forçado, Privação de liberdade, Associação para Delinquir, Subtração de menores • 22		Investigação em curso	ARG; URU
URU	Orletti (“primeiro voo”)	Tortura, Morte, Sequestro, Desaparecimento forçado • 25		Investigação em curso	URU; ARG
URU	Orletti (Soba e outros)	Desaparecimento forçado, Privação de liberdade • 28	8	Sentença (2011)	URU; ARG
URU	Universindo Rodríguez e Lilián Celiberti	Tortura, Sequestro, Privação de liberdade • 4		Investigação em curso	URU; BRA
URU	Washington Barrios	Privação de liberdade • 1		Acumulada com a causa Orletti (Soba e outros)	URU; ARG
URU	Zelmar Michelini	Morte • 4	2	Sentença (2011)	URU; ARG

Obstáculos e desafios na investigação dos crimes do Condor

A discussão nos workshops em Santiago e Montevidéu nos permitiu identificar 10 desafios centrais que os operadores judiciais têm que enfrentar quando tentam investigar os crimes transnacionais do Condor. Consideraremos cada um deles em detalhe.

Em relação à *Construção jurídica dos crimes transnacionais do Condor*, podemos destacar quatro dificuldades principais:

1. Legislação processual inadequada e o papel das vítimas

No Uruguai e Chile, os modelos penais que se utilizam na investigação das violações dos direitos humanos (no marco da operação Condor ou não) provém de **códigos penais destinados a sancionar crimes comuns, e não os crimes sistemáticos**. Portanto, os modelos penais à disposição dos operadores judiciais não são suficientes para abordar e finalizar processos de crimes de natureza tão complexa. Além disso, o fato de ter de dar atribuição a esses crimes como crimes comuns no momento do julgamento dos delitos tem como resultado penas muito baixas nas sentenças, o que não reflete a gravidade e a importância dos crimes cometidos. Além disso, destaca-se que tanto no Uruguai como no Chile, a existência de problemas vinculados às ferramentas processuais disponíveis. A tarefa de **recopilação e apresentação das provas nos julgamentos ficam sempre sob responsabilidade das vítimas**. O problema, é que isso tem feito com que as vítimas assumam uma enorme responsabilidade sem que o Estado, nesse sentido, assumam seu papel. As vítimas devem prestar depoimento, e esse fato faz com que haja um processo de revitimização das vítimas causando também problemas de recursos econômicos e de tempo. As vítimas devem contribuir com as provas, mas, depois, não podem ter um papel ativo no Uruguai, onde não existe a figura do querelante como na Argentina. Por essa razão, quer-se promover um projeto de lei para a participação da vítima nos processos judiciais. Além da invisibilidade das vítimas no processo penal em si, existe também a invisibilidade de gênero nos modelos penais aplicados. Um exemplo disso, no processo de violência sexual movido e denunciado por 28 mulheres em Montevideo em 2011, a juíza solicitou o processamento somente muito tempo depois, apenas em 2016. Foi um processo por privação de liberdade, que não incluiu nem a tortura nem o estupro. A promotora apelou para que no processo fosse considerado que o acusado deveria ser julgado também por tortura.



Mobilização fora dos tribunais em Comodoro Py, Buenos Aires, para o julgamento Atlético-Banco-Olimpo, dezembro de 2009, foto: Francesca Lessa

2. Tipificação dos crimes e prescrição

Desde 2006, existe na legislação nacional uruguaia, os crimes de desaparecimento forçado e de tortura, assim, alguns promotores e juízes afirmaram que esses crimes poderiam servir para ser aplicados na investigação dos crimes da ditadura e do Condor. A Constituição do Uruguai, apesar de ser ultrapassada, tem o artigo 72 que permite integrar os tratados internacionais ao direito nacional. Portanto, a base legal para aplicar o direito internacional no Uruguai não mostra que esse seja o problema principal, senão a interpretação levada a cabo pelos operadores judiciais quando tem que enfrentar e resolver esses tipos de crimes e investigações. Alguns deles, têm lutado ao longo dos anos para sustentar que os tratados de direitos humanos devem ser aplicáveis no país com o fim de poder esclarecer os crimes cometidos. Apesar disso, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem desqualificado em todos os casos o pedido de **tipificação do crime** de desaparecimento forçado, utilizando as qualificações de privação de liberdade ou de homicídio. Esta é uma batalha jurídica que continua. Atualmente, a prescrição como instrumento de extinção da ação penal é ainda um tema de debate no Uruguai: se a aplicação da prescrição prevista para crimes comuns deveria ser aplicada nestes casos ou se distinguiria a imprescritibilidade disposta pelo direito internacional.



Ex coronel Manuel Cordero, julgamento Operação Condor, 5 de março de 2013, Buenos Aires, foto cortesia: H.I.J.O.S. Capital

3. Necessidade de estabelecer o contexto global do Plano Condor

Vários dos participantes do workshop destacaram a importância de se contar com um processo de compreensão para gerar um marco comum que permita entender a Operação Condor em toda a sua dimensão, seguindo o modelo da causa 13/84 na Argentina, na qual foram julgados os integrantes das Juntas Militares entre abril e dezembro de 1985. O processo 13/84 provou que durante a ditadura de 1976 até 1983, existiu na Argentina um plano sistemático de torturas e desaparecimento forçado de pessoas, constituindo, a partir daí, um ponto de partida para todos os julgamentos que tiveram continuidade, nos quais não foi necessário retomar a provar a existência nesse plano. Deste modo, seria útil ter um marco parecido sobre a existência do Plano Condor como um plano sistemático, dentro do qual se possa enquadrar e julgar os crimes específicos e pontuais em relação a cada um dos acusados.



Comemorações no 40º aniversário do golpe de Estado do Pinochet, Santiago de Chile, setembro de 2013, foto: Francesca Lessa

4. Dificuldade de identificar nos casos Condor

Na Argentina, o país que mais tem avançado na investigação dos crimes do Condor, todos os casos de estrangeiros sequestrados no país são investigados como possíveis vítimas da Operação Condor. Com o passar do tempo, este enfoque começou a ser questionado, porque na verdade nem todos os estrangeiros foram de fato vítimas da coordenação repressiva, senão que alguns deles se juntaram a militância local e foram perseguidos por causa disso. No Chile, por outro lado, não se sistematizou a investigação e, portanto, há vítimas do Condor que são investigadas em outras causas. Exemplo disso, é o processo relacionada com o centro clandestino de Villa Grimaldi. Foi discutido, por causa disso, a importância de identificar critérios que sirvam para comprovar se os casos podem ser enquadrados na coordenação repressiva. *O elemento chave para identificar casos do Condor parece ser o cruzamento das fronteiras.* Tal cruzamento pode tomar alguma destas formas: (a) intercâmbio de informação sobre uma vítima entre, ao menos dois países, normalmente o país de origem da vítima e o país onde se encontra; (b) a participação de agentes estrangeiros nos crimes; e (c) o traslado das (s) vítima (s) do país de detenção a seu país natal/de origem. ***Quaisquer destes três critérios é indicativo de um caso Condor.***

Em relação as *Equipe e recursos para investigar os crimes transnacionais do Condor*, os participantes do workshop destacaram os seguintes temas:

5. Falta de continuidade e comunicação

Esta situação gera problemas dado que é muito comum que diferentes juízes/ministros, bem como outros atores sociais e operadores judiciais, intervenham em diferentes etapas e momentos do processo. Esta situação tem causado atrasos e demoras, já que frequentemente, há a intervenção de um novo ministro, no Chile e no Uruguai, por exemplo, o que implica na prática um reinicialização da investigação.

6. Formar equipes multidisciplinares

É necessário poder estabelecer equipes multidisciplinares para poder apoiar as **investigações, nos quais participem médicos forenses especializados, antropólogos, advogados, historiadores, psicólogos, etc.** Atualmente, as equipes confirmadas não cumprem com estes requisitos, em particular

a Equipe do Ministério do Interior no Uruguai. Na Argentina, por exemplo, foi necessário criar equipes interdisciplinares que permitissem examinar todos os elementos que fazem parte das investigações. Se bem os testemunhos são o eixo central do acervo de provas, ao serem encontradas novas provas documentais os atores do processo se viram obrigados a superar novos desafios, que finalmente levaram a criação de equipes interdisciplinares. Outro tema que também surgiu em relação ao Uruguai, é que não existe o acompanhamento as vítimas. Isso, acaba gerando um processo de revitimização das mesmas em muitas oportunidades. É necessário a institucionalização do acompanhamento, isso, pode ser conseguido em parte, incorporando a estas equipes de trabalho psicólogos e assistentes sociais.

Por ultimo, sobre o *Acceso às provas e comunicação entre os juízes, promotores, advogados e organismos de Direitos Humanos*, destacaram-se os quatro temas seguintes:

7. Dificuldade de acesso a arquivos

Destacou-se, principalmente a impossibilidade de ter acesso na sua totalidade do chamado Arquivo do Terror no Paraguai, que contém documentos chaves sobre a Operação Condor, mas também a outros arquivos, militares e civis, em toda a região. Salientou-se que alguns organismos tem a intenção de manter um controle sobre a documentação, a qual não podem ter acesso outros operadores envolvidos na atividade investigativa, afetando negativamente o desenvolvimento dos processos judiciais.

8. Dispersão, volume e análise da prova

A existência de vários processos judiciais em cada país e em cada região faz com as provas estejam dispersas. Em outros casos, como destacaram os participantes da Argentina, a dificuldade não é tanto a possibilidade de encontrar a prova, senão a dificuldade para processar grandes quantidades de informação, identificar aquilo que apresenta maior importância para o processo e, além disso investigar a fundo outros elementos que possam surgir dessa informação. Frequentemente, não há uma lógica ou um critério organizador que ajude a analisar melhor a informação que foi conseguida. O trabalho com a informação requer esforços e os Estados não tem uma política muito clara sobre o modo no qual se deve trabalhar e administrar esta informação. Um avanço seria implementar políticas de digitalização, para criar índices de análise que permitam um exame mais simple e a incorporação das provas nos julgamentos.

9. Atrasos nos exhorto internacionais

Estes atrasos têm um impacto na hora de conseguir provas sobre os crimes cometidos em parte ou na sua totalidade no território dos países vizinhos. Destacou-se que os atrasos e demoras são gerados pelas petições dos exhorto internacionais só que, hoje em dia, a tecnologia existente deveria favorecer uma comunicação e intercâmbio mais fluido da prova nos processos. Tais atrasos e demoras se tornam injustificáveis diante do acesso à tecnologia com a qual se pode contar atualmente.

10. Falta de especialização e capacitação

Nesta área, duas questões, em particular, tiveram destaque sobre Uruguai. Por um lado, uma funcionária do Ministério de Relações Exteriores, salientou a necessidade de dar capacitação para os funcionários públicos que tiverem que trabalhar neste tema, para conscientizar e sensibilizar os funcionários. No caso do Ministério de Relações Exteriores, a transnacionalização da justiça requer que os funcionários diplomáticos estejam à altura desta tarefa. Por exemplo, as Relações Exteriores tiveram um papel importante no julgamento Condor que acontece na Itália. Porém, o funcionário que recebe a testemunha deve ter sensibilidade e conhecimento, e, que isso não seja algo só da sua própria boa vontade, senão por ter tido um curso de capacitação em direitos humanos. Por outro lado, muitos participantes destacaram que na justiça do Uruguai não há investigadores, nem promotorias especializadas, pois são os próprios funcionários responsáveis pelos crimes comuns os que investigam os casos de crimes de lesa humanidade. Portanto, geralmente existe uma falta de especialização nestes

temas e não há instituições equivalentes, como, por exemplo, a Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad do Ministério Público da Promotoria na Argentina. Em outubro de 2015, no Uruguai, foi criada a Unidade Especializada em Direitos Humanos, para dar capacitação aos promotores sobre o contexto histórico e político da ditadura. Embora seja um passo importante, não parece ser suficiente se isso não estabelecer também capacitações históricas, bem como políticas, estratégias e linhas institucionais de investigação e capacitação sobre os crimes a serem investigados. Em setembro de 2016, um projeto de lei foi apresentado ao Parlamento para instituir uma Promotoria Especial em Direitos Humanos, para investigar os crimes da ditadura no Uruguai.



Workshops em Montevideu em junho de 2016 e Santiago de Chile em dezembro de 2015

Conclusões e recomendações

Recopilando as conclusões dos workshops em Santiago e Montevideu, chegou-se as seguintes três recomendações de políticas públicas para agilizar a investigação e o julgamento dos casos Condor em um futuro próximo:

Criação de equipes multidisciplinares dedicados a investigar as causas dos direitos humanos

Estas equipes poderiam ser criadas no interior dos juizados e/ou nos escritórios de outros operadores judiciais que intervenham nos julgamentos, como as promotorias. Devida a natureza complexa dos crimes, estas equipes deveriam ser multidisciplinares, integrando não só os operadores judiciais (promotores ou advogados), mas também os seguintes especialistas, em particular:

- **historiadores e analistas de arquivos**, para dar apoio a investigação documental e de arquivos dos crimes;
- **psicólogos e assistentes sociais**, para o relacionamento com as testemunhas e vítimas e para acompanhá-los nas diferentes etapas do processo penal;
- **antropólogos e médicos forenses**, em relação às tarefas de localização busca e identificação de vítimas de desaparecimento forçado;
- **tradutores**, para dar assistência com a documentação enviada desde EUA e/ou em português.

Estabelecer uma base de dados o de reposição, a nível regional, com informação sobre o Plano Condor

A proposta é estabelecer uma base de dados ou de reposição, a nível regional, que contenha documentos e informação probatória, testemunhos e informação dos arquivos produzidos por cada Estado que participou no Condor (a Argentina, o Brasil, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Uruguai, o Peru e o Equador) e que possam ser utilizadas nos processos judiciais em curso, para evitar as demoras atrasos próprios dos trâmites dos exorto. Os três principais acervos dos quais ditas bases deveriam ser fornecidas dados incluem:

1. Informação oficial
 - 1.1. Poder Executivo
 - 1.2. Poder Judicial
2. Informação produzida por organizações da sociedade civil local e internacionais
3. Informação desclassificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Para mais detalhes, sobre a construção da base de dados ver o anexo 1 (páginas 14 e também as seguintes).

Produzir circuitos mais ágeis de transmissão da informação, documentação e provas para os julgamentos

A luz da dificuldade existente para conseguir provas dos crimes transnacionais, bem como as demoras e atrasos que caracteriza o exorto internacionais que deveriam facilitar o intercâmbio de informação. Foram propostas três sugestões de políticas públicas para favorecer o avanço das investigações:

- **Reduzir o tempo que demora a tramitação dos pedidos de assistência jurídica internacional através dos exorto;**
- **Emendar os Memorandos de Entendimento entre os países da região para o Intercâmbio de Documentação e para o Esclarecimento de Violações Graves aos Direitos Humanos**, fixando um prazo de 60 dias úteis para realizar a entrega da documentação em formato digital (por exemplo, o Memorandum de Entendimento entre a República Argentina e a República do Chile para o Intercâmbio de Documentação para o Esclarecimento de Violações Graves aos Direitos Humanos assinado no dia 12 de maio de 2014). Poder-se-á pedir uma extensão de 30 dias úteis, se existir um problema específico com a documentação;
- **Redigir novos convênios de cooperação judicial** que permitam os juízes e promotores intercambiar diretamente (sem ter que recorrer aos exorto) informação, documentos e arquivos para poder incorporá-los a tramitação das causas e investigações sobre o Condor. Ditos convênios poderiam ser celebrados, por exemplo, entre o Programa de Direitos Humanos do Chile e o Ministério Público da Promotoria da Argentina. O objetivo principal é garantir uma comunicação e cooperação mais fluente e direta entre os atores que investigam os crimes ativamente. Esses convênios permitirão gerar canais de comunicação direta entre os órgãos envolvidos nos processos (tanto promotores como juízes), que considerem a transmissão de informação descoberta durante as investigações e os elementos de prova específicos, bem como sua utilização e incorporação direta e formal nos processos judiciais.

É importante sublinhar que as três propostas são independentes e diferentes: a primeira tem alcance geral, enquanto as outras duas têm um alcance específico. Apesar de as três propostas terem objetivos em comum, são autônomas e nenhuma delas pode subsistir sem a outra.

ANEXO 1

Base de dados ou reposição digital sobre a investigação da Operação Condor.

Por Lorena Balardini, Universidad de Buenos Aires

A proposta geral é estabelecer **uma base de dados ou de reposição**, a nível regional, que contenha documentos e informação produzida por cada Estado (na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai e no Uruguai) e que possa ser utilizada nos processos judiciais em curso, para evitar as demoras e atrasos próprias do trâmite dos exorto.

A partir das discussões, nos workshops no Chile e no Uruguai, graças a participação de especialistas, vimos que a informação necessária para o trâmite dos processos do Condor se divide basicamente nas seguintes:

1. Informação oficial
 - 1.1. Poder Executivo
 - 1.2. Poder Judicial
2. Informação produzida por organizações da sociedade civil local e internacionais
3. Informação desclassificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Alguns exemplos de cada tipo de informação são:

1. Informação oficial

1.1. Poder Executivo

1.1.1 Comissões da Verdade (CONADEP, Rettig, Valech, CNV Brasil, etc): relatórios, testemunhos, arquivos de dados das vítimas, informação sobre os responsáveis, centros clandestinos, circuitos repressivos, etc.

1.1.2 Ministérios (defesa, interior, entre outros): arquivos de dados de membros das forças armadas e de segurança, planos estratégicos de ação das forças, materiais de cursos e capacitações.

1.1.3 Arquivos do tema: Arquivo Nacional da Memória (Argentina), Arquivos do Terror (Paraguai).

1.2 Poder Judicial

- Expedientes judiciais relativos aos processos do Condor;
- Testemunhos de vítimas/familiares e peritos (em vídeo ou escritos);
- Cópia autenticada de materiais de arquivos ou dependências do poder executivo nacional ou de outros países nos casos Condor.

2. Informação produzida por organizações da sociedade civil

- Testemunhos de vítimas ou familiares de vítimas.
- Lista de responsáveis
- Informação sobre centros clandestinos de detenção, circuitos repressivos.

Conteúdo da base de dato

Com este amplo universo de informação em mente, o planejamento e a montagem da base de dados podem ser pensadas em etapas diferentes.

Uma *primeira etapa* buscará recolher os materiais que estiverem mais acessíveis para os atores de cada país: a informação produzida pelas organizações da sociedade civil, materiais públicos como biografias de vítimas Condor, bibliografia e publicações sobre o Condor, e as sentenças nos processos do Condor na região e no exterior, que são de livre acesso. Em uma segunda etapa, os materiais Condor obrantes nos arquivos e instituições de Poder Executivo de cada país. Finalmente, em uma terceira etapa, os materiais dos processos judiciais.

Diferentes niveles de acesso e segurança

Cada uma das etapas de construção da base está relacionada com os níveis de acesso que os tipos de informação requererem. É importante elaborar permissões e usuários para garantir o acesso sem comprometer a informação sensível, de acordo com seu nível de confidencialidade, para a proteção e reserva dos dados pessoais daqueles envolvidos no processo.

Os materiais da etapa 1 e os do mesmo estilo que possam ser somados posteriormente serão de acesso ao público. Os materiais próprios da etapa 2 serão também acessíveis aos advogados e vítimas que façam parte nos processos judiciais. Por último, os da etapa 3 serão unicamente para operadores judiciais, para facilitar a tramitação das causas.

Especificações técnicas

A ferramenta seria construída em um suporte web de código livre que seja acessível a partir de um terminal qualquer com acesso à internet. A intenção não é que seja uma mera reposição senão a indexação dos documentos, a classificação e a possibilidade de realizar buscar com critério determinado. Neste sentido, um componente essencial desta base de dados é um buscador inteligente, que possa rastrear de forma rápida e eficiente grandes volumes de informação. Um requisito para isso é que a informação inserida na base da página web do Condor tenha um tratamento prévio de reconhecimento ótico de caracteres (OCR).

Custos e questões administrativas (USD 38–40,000)

Os custos de montagem desta base de dados estão concentrados nas seguintes tarefas:

1. *Desenho da base, um buscador e os índices* que organizarão a informação. Valor aproximado: USD 30.000 (pagamento de uma só vez)
2. *Tratamento da informação* para garantir a compatibilidade com o sistema (conversão de arquivos de imagens a pdf, checar o estado de OCR dos documentos). Valor aproximado: USD 15000 (em uma única vez)
3. *Serviço de hosting* (servidor web). Valor aproximado: USD 300 por ano (por 5 anos, valor total USD 1500)
4. *Manutenção da base web*. Valor aproximado: USD 1000 por ano (por 5 anos, valor total USD 5000)

Os valores das atividades 1, 3 e 4 podem ser mais baixos se a página web for instalada nos servidores do Instituto de Políticas Públicas dos Direitos Humanos do MERCOSUR ou na Procuração Geral da Nação na Argentina.

Os profissionais que devem ser contratos para a montagem da ferramenta são:

- Um técnico em informática ou designer web, para tarefas 1, 3 e 4.
- Um especialista em bases de dados e produção e informação nos temas relacionados aos direitos humanos/ditaduras do Cone Sul, para as tarefas 1 e 2.

Justiça mais além dos limites das fronteiras

Os crimes transnacionais da Operação Condor



observatorio

Luz Ibarburu



de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos



The Leverhulme Trust

